
CONFERENCIA

**LOS ESTADOS UNIDOS EN CHILE Y
CHILE EN LOS ESTADOS UNIDOS***

UNA RETROSPECTIVA POLÍTICA Y ECONÓMICA (1963-1975)

Edward M. Korry

Invitado por el CEP en octubre de 1996, el embajador de Estados Unidos en Santiago entre 1967 y 1971, Edward M. Korry, entregó su testimonio de los años críticos en que estuvo al mando de la misión estadounidense en Chile, situándolo en el contexto más amplio de las conexiones chileno-estadounidenses durante los sesenta y primera mitad de los setenta. El embajador Korry destaca aquí la ayuda de enormes dimensiones —que habría llegado a bordear los 20 millones de dólares (dólares de ese entonces)— proporcionada por el gobierno de John F. Kennedy al Partido Demócrata Cristiano en Chile, y cuyo objetivo, según el embajador, era establecer en este país una “dinastía democratacristiana” que constituyera un polo de atracción opuesto al ejercido por la Revolución Cubana en América Latina. (Una iniciativa muy similar a la llevada a cabo en Italia en 1948.) A fines de 1967, con la llegada del embajador Korry a Chile, se pone fin a esa “relación incestuosa partido-partido” y se restable-

EDWARD M. KORRY. Embajador de Estados Unidos en Chile entre los años 1967 y 1971.

* Conferencia presentada el 16 de octubre de 1996 en el Centro de Estudios Públicos. Traducción al castellano de revista *Estudios Públicos*.

cen las relaciones Estado-Estado. En las elecciones de 1970, afirma el embajador, apenas se habrían canalizado a través de la CIA 125 mil dólares para la llamada “campana del terror”. Sin embargo, tras el triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales se aprobaría un vasto programa destinado a “facilitar los medios que permitieran la supervivencia de órganos de prensa, medios de difusión y una oposición democrática”, y de este modo contrarrestar las medidas adoptadas por el gobierno de la Unidad Popular para asumir el control de los medios de comunicación.

A su vez, junto a otras revelaciones de sucesos anteriores y posteriores al triunfo de Allende el 4 septiembre, el embajador se refiere a las motivaciones que habrían llevado a los principales órganos de la prensa occidental a describir a Salvador Allende como un “socialdemócrata asesinado por un Ejército represivo”, y a la investigación (o *Hearings*) efectuada por una Comisión del Senado de Estados Unidos (conocida después como Comisión Church) respecto de las operaciones encubiertas de la CIA en Chile entre los años 1963 y 1973, de la cual fue excluido el embajador Korry, impidiéndose así que diera su testimonio. Esta exclusión, según el embajador, tuvo por finalidad ocultar la ingente ayuda proporcionada por los demócratas a la DC chilena en la primera mitad de los años sesenta.

El texto que aquí se reproduce corresponde a la versión escrita que entregó el embajador Korry. Esta versión incluye largas notas en las que el embajador agrega otros antecedentes y pormenores, así como cuatro apéndices, al final, que expanden los siguientes temas: i) la ayuda militar soviética (1971-1973); ii) las actividades de la CIA en Chile entre 1969 y 1976; iii) el gobierno de Eduardo Frei M., el cardenal Raúl Silva H. y la Isla de Pascua, y iv) las negociaciones sostenidas en 1971 con el gobierno de Salvador Allende.

En esta edición de *Estudios Públicos* también se reproduce una entrevista al embajador Korry y, en “Chile en los archivos de Estados Unidos”, se incluyen cables intercambiados entre el embajador y el Departamento de Estado de Estados Unidos en agosto de 1970 y el Informe de Contingencia (“Fidelismo sin Fidel”), que se preparó ante la eventualidad de que Allende ganara las elecciones y asumiera la presidencia. Las ideas contenidas en este último e importante documento orientarían la política de Estados Unidos respecto de Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. Se trata de un texto de extraordinario interés que por primera vez se da a conocer al público.

El motivo de mi presencia esta tarde es presentar una relación de los hechos: entregar una nueva perspectiva de por qué ocurrieron ciertos acontecimientos. Después de todo, la historia está moldeada por las experiencias, el ambiente y las contingencias. Ustedes están, por decirlo así, en presencia de una de esas contingencias históricas: un actor que participó en el drama de vuestro pasado más turbulento, alguien que encarna los caprichos de la condición humana. Su propio pasado, su propia experiencia configuraron lo que hizo en y a Chile, y el legado que dejó tras de sí.

En primer lugar, pasé tres años en Europa Central (entre 1948 y 1951), durante la época en que Stalin hizo caer la cortina de hierro. Belgrado, Budapest, Praga y Sofía fueron excelentes puestos de observación para estudiar las tácticas y estrategias de los leninistas, los tira y afloja del marxismo, las estructuras y las iniquidades de un Estado policial y del centralismo burocrático, la interacción entre dependencia e independencia y, no menos importante, pude apreciar el coraje tanto del dictador Tito como de un extraordinario diplomático en Belgrado, un funcionario de carrera que gracias a la agudeza de sus análisis contrarios a lo esperado, y a su propia audacia, logró cambiar, a decir verdad revertir, la política norteamericana y la del entonces gobierno yugoslavo.

En segundo lugar, doce años de residencia en Alemania, Francia e Inglaterra, además de prolongados viajes a la URSS, Asia, África y el resto de Europa me ofrecieron singulares oportunidades para advertir lo imperfecta que es la naturaleza de las naciones, lo mismo que la de los seres humanos y del mercado. Al seguir una regla básica del periodismo y de las ciencias —descubrir el problema—, cobró forma a la vez la primera norma de lo que se transformaría en mi carrera: la solución de problemas.

En tercer lugar, mi paso por el Harvard Business School en 1960, más un año trabajando al lado de un magnate me ayudaron a comprender mejor la eficiencia, la lógica y la dureza del mercado. También me confirmaron que, tal como ocurre en la economía y en la política, en la mayoría de las interacciones humanas opera un mecanismo de equilibrio.

En cuarto lugar, la permanencia de cinco años en Etiopía, como un embajador joven y neófito, me impuso un doble desafío: contribuir a la modernización de una sociedad preindustrial y a su supervivencia como Estado, y hacerlo mientras este país se transformaba en un peón cada vez más importante en el contexto de la rivalidad mundial entre las dos superpotencias. Analizar a fondo los problemas del desarrollo a partir de la nada, mantener a salvo a 7.000 funcionarios estadounidenses, todo esto mientras dos guerras civiles estremecían el país y el Kremlin desarrollaba sus planes

para apoderarse del Cuerno de África, fue sin duda una experiencia instructiva. El Presidente Johnson agregó un reto adicional cuando en 1966 me convocó a Washington para que redactara en seis semanas las directrices de una nueva política estadounidense hacia África —una tarea, de hecho, que exigía abordar la dudosa compatibilidad entre democracia y desarrollo en el África subsahariana de ese entonces. Lo que también es de cierto interés para Chile y sus vecinos en los años setenta, durante cuatro años argumenté una y otra vez a las autoridades de Washington que el Kremlin tenía la intención de utilizar a Somalia como cabeza de puente para reemplazar a Estados Unidos en Etiopía y lograr controlar el Cuerno, el Mar Rojo y los flancos de Arabia¹.

¹ Un dubitativo Jefe del Estado Mayor Conjunto me invitó en 1964, y luego en 1966, a exponer esta hipótesis que se basaba enteramente en experiencias anteriores. En la primera ocasión el Departamento de Estado hizo lo posible por desligarse de la presentación, pero la segunda comparecencia coincidió con los primeros informes de inteligencia que confirmaban que los soviéticos estaban efectivamente construyendo bases aéreas y marítimas en Somalia, tal como lo había pronosticado en el testimonio de 1964.

En contraste con lo que ocurrió de manera casi simultánea en Chile, el derrocamiento del anciano emperador Haile Selassie, tras un golpe militar en 1973, fue ampliamente elogiado por la prensa occidental; la dictadura militar de Addis Abeba fue justificada a lo largo de muchos años por los medios informativos de todo el mundo en atención a las reformas socialistas supuestamente constructivas que estaba aplicando. Sólo cuando sus prácticas represivas y su subordinación cada vez mayor a su nuevo patrón —la URSS— alcanzaron proporciones abrumadoramente obvias, sus admiradores occidentales empezaron a cambiar de actitud.

Una de las razones por las que los más importantes líderes de opinión occidentales, en particular los estadounidenses, se formaron con tanta facilidad una imagen engañosa de la situación en el Tercer Mundo, fue que las zonas periféricas a los principales escenarios de la Guerra Fría (Etiopía, Somalia y Chile, por nombrar sólo tres ejemplos) casi nunca eran visitadas por reporteros o editores de mayor categoría. Apenas unos pocos académicos norteamericanos demostraron cierto interés y, en el caso del Cuerno, en general, aquellos de menor nivel. Sin embargo, ellos se convirtieron después en parte integral de redes de formación de opinión.

Los rusos, que habían comenzado por armar a los somalíes hasta los dientes, acabaron por desplazar totalmente a los estadounidenses de Etiopía, proporcionando no menos de *12.000 millones de dólares* en armas a la “democracia popular” comunista establecida en Addis Abeba. Un cuerpo expedicionario cubano de 40.000 hombres rescató a su líder, el coronel Mengistu Haile Mariam, cuando Somalia, aún dependiente de la Unión Soviética, lanzó un ataque sorpresivo contra su vecino.

Esta historia admonitoria no sólo cobró más de 1 millón de vidas sino, además, provocó la intervención norteamericana en una maniobra de equilibrio de poderes similar al juego de las sillas musicales. Estados Unidos se apresuró a acudir en ayuda de Somalia para así ocupar el lugar que acababan de dejar los soviéticos. Y para completar esta penosa historia, en los años noventa los estadounidenses se aventuraron otra vez en Somalia; sus soldados lideraron un cuerpo de las Naciones Unidas en una iniciativa destinada a reconstruir la nación. La verdad es que se trató de un vano intento por eliminar los restos de una sensación de indiferencia derivada del ensimismamiento que sobrevino tras la Guerra de Vietnam, “Chile” y otras situaciones mal interpretadas que acaecieron al finalizar la primera mitad de los años setenta.

En la actualidad, los retratos de Haile Selassie están en todas partes en Addis Abeba, ciudad que visité en 1994 después de veinte años, y el gobierno, absolutamente socialista en un principio, está adoptando de manera gradual, en este país devastado por la guerra y el “socialismo”, reformas al estilo de Chile.

Los cuatro años completos que pasé en Chile me enseñaron que la sociedad civil, la verdadera cima del desarrollo político, no siempre es un contrapeso lo suficientemente poderoso para impedir un suicidio nacional. El caso de Chile también reforzó mi viva creencia en la limitada capacidad estadounidense para manejar todos los asuntos, nuestro famoso enfoque de “todo puede hacerse” aplicable a cualquier problema, actitud que alcanzó su apogeo a comienzos de los sesenta cuando nos aventuramos en muchas empresas irrealizables. Si los años que estuve en Etiopía me habían permitido observar el funcionamiento interno, por decirlo así, de unos veinte organismos del gobierno federal, esta vez “Chile” me ofrecía un panorama inigualable de cómo se aplicaba la política norteamericana.

Los asuntos sobre los que expreso mis opiniones los abordé en mi condición de estadounidense, de ciudadano común. Actué como “generalista”, uno de nuestros eufemismos típicos que elevan nuestra autoestima al tiempo que ocultan nuestras insuficiencias en todas las materias.

¿Por qué, entonces, escoger como tema “Chile en los Estados Unidos”? Éste no ha sido el tópico de ninguna de las vehementes declaraciones sobre Chile en el extranjero. Pero todas las relaciones son y deben ser mutuas. Tarde o temprano ellas responden al mecanismo de equilibrio que postuló David Ricardo. Hoy día en muchas áreas de las políticas públicas las ideas fluyen desde Chile hacia Estados Unidos. Puede que el origen de éstas sea norteamericano —al fin y al cabo, todos bebemos de fuentes que no hemos cavado—, pero en la actualidad son ustedes quienes están obligando a muchos expertos mundiales a reconsiderar sus nociones sobre crecimiento, responsabilidad fiscal, manejo monetario, privatización y ventajas comparativas. De manera que “Chile en los Estados Unidos” constituye un tema tan pertinente ahora como lo fue en los años sesenta.

Mi única gran sorpresa al llegar a este país fue descubrir que los chilenos tenían un acceso mucho más influyente que yo a la Casa Blanca, a las agencias de mi gobierno, a las grandes corporaciones, a los cabilderos (*lobbyists*) mejor situados, a políticos, académicos y editores clave. Por ejemplo, ¿cómo persuadieron los chilenos a John F. Kennedy para que, por así decirlo, “se jugara el todo por el todo” en crear una dinastía democratacristiana? ¿Cómo se explica que unos pocos chilenos convencieran a importantes académicos, políticos y periodistas de que el doctor Allende —el líder de un partido que se decía marxista-leninista, ferviente admirador y aspirante a socio de Castro, y un mandatario comprometido con la creación de un Estado que controlara todas las palancas fundamentales de la producción y de las finanzas— no representaba una amenaza para la libertad, de

que podría ser manejado por el simple hecho de tener una personalidad agradable y de no abrigar, en realidad, la intención de dañar a nadie? ¿Cómo lograron algunos chilenos inducir al Presidente Nixon a embarcarse en 1970 en una aventura descabellada cuyo objetivo era frustrar el acceso de Allende al poder? ¿Cómo convencieron los chilenos a un emisario de los presidentes Johnson y Carter para que actuara como cabildero no oficial del Presidente Allende? Cuando estas cosas no se ponen dentro del contexto, falta un elemento esencial de “Estados Unidos en Chile”².

² Desde mi punto de vista norteamericano el Chile de los titulares resulta mucho más valioso, ya que arroja luz sobre la manera en que suele operar la política en una democracia de estilo occidental. Mucho más que como un estudio de casos de la CIA, como el punto central de una investigación del Senado sobre las actividades de la Agencia entre 1964 y 1973, o como objetivo de la política exterior de Washington, ese Chile ofrece claves extraordinarias de por qué los “valores”, término generalizado y común en el debate público estadounidense, casi siempre se sacrifican en función de intereses en conflicto. Sólo cuando el electorado percibe que se han excedido demasiado los límites del juego limpio en el ámbito partidista, la moral colectiva se impone y reemplaza al sistema imperante, ya se trate de Estados Unidos, o del Chile de mediados de 1973, cuando el desastroso camino escogido por Allende convenció a la mayoría de los partidos centristas de la necesidad de protestar y recurrir a las Fuerzas Armadas como tabla de salvación.

Así pues, los mismos senadores, los mismos diarios y los mismos académicos estadounidenses que habían celebrado y ayudado a ocultar una intervención verdaderamente “masiva” en los asuntos chilenos entre 1963 y 1967 pusieron pies en polvorosa y se apresuraron a buscar refugio tan pronto como Richard Nixon fue obligado a renunciar y tan pronto como Estados Unidos se vio forzado a retirarse de Vietnam. Los efectos en los chilenos y en Chile fueron ampliamente ignorados en medio del forcejeo de los políticos para ahorrarse a sí mismos y a sus defensores un bochorno perjudicial.

En aras de una “verdad” superior sacrificaron la honestidad y la divulgación completa de los hechos; en nombre de la unidad bipartidista emplearon el mínimo común denominador para cubrir a algunos de los malos con un manto de inocencia y convertir en demonios a algunos de los buenos esparciendo sobre ellos una nube de insinuaciones y acusaciones veladas. Esas tácticas, que sin duda traen a la memoria las de otro senador, Joe McCarthy, hicieron que yo fuera el único excluido de entre los funcionarios citados a prestar testimonio antes de que se diera a conocer el estudio del caso de las actividades de la CIA en Chile; la excusa esgrimida, a todas luces falsa, fue —según lo declarado por el senador Frank Church durante la sesión en que se divulgó dicho estudio— que la Comisión [Church] había determinado que yo no tenía ningún conocimiento sobre los asuntos en que más se centraba la investigación.

Al actuar de ese modo ellos no sólo volvieron a rebajar, aunque sin quererlo, los estándares generales de integridad pública, la misma virtud que en apariencia procuraban realzar, sino que además asestaron un golpe demoledor a algunos miembros de la burocracia gubernamental, en particular a los del servicio diplomático y consular que guiaban sus actos ateniéndose a las virtudes cívicas y a la moral.

Estoy íntimamente convencido de que la prisa por aislar al régimen militar en Santiago, pese a las señales iniciales de un golpe de Estado que emitió el PDC, entre otras colectividades, contribuyó a exacerbar la paranoia criminal de los oficiales del Ejército y de sus simpatizantes civiles que perpetraron magnicidios autodestructivos en el exterior.

El fallecido filósofo británico Michael Oakeshott explica y justifica la aparente sordidez de la política “de intereses” en una democracia, y señala por qué un sentido innato e individual de “incorrección” y “rectitud” debería actuar, en condiciones normales, como un regulador automático que impida dejarse llevar por emociones que podrían impulsar a un político a cometer, como ciudadano común, transgresiones inaceptables.

Esforzarse por encontrar algún sentido en el cúmulo de escritos necios acerca de Chile equivale a irrumpir en medio de una mala película de misterio. El guión está colmado de pistas falsas, pero en la cinta se ignoran para que la historia pueda finalizar con soluciones simplistas. Las escenas cruciales yacen en el suelo de la sala de montaje, censuradas, cortadas, sepultadas o inadvertidas. La ideología, el partidismo o un desvergonzado interés personal arrasan con ellas y las relegan a un rincón de la memoria.

Por ejemplo, ¿cómo se explica que el medio de difusión que influía más poderosamente en la opinión pública mundial de ese entonces, el BBC World Service, tardara 16 años en reconocer (en forma muy discreta por lo demás) que la muerte de Allende se debió a un suicidio y no a un ajusticiamiento como había informado durante tanto tiempo? ¿Y por qué *The New York Times* esperó casi una década antes de poner en tela de juicio su afirmación, en la que se basó gran parte de la conmoción mundial que despertó la muerte de Allende, de que había sido un asesinato? ¿Por qué, uno se pregunta, sucedió esto a pesar de que la verdad era ampliamente conocida? Más aún, ¿cómo editores honrados llegaron a creer que un puñado de agentes de la CIA, que en 1969 y comienzos de 1970 contaban con menos dinero que cualquier congresista que postulara a un cargo en Estados Unidos, podrían hacer mucho en un lugar como Chile?³ (En las elecciones parlamentarias celebradas en Chile en 1969 la CIA gastó US\$ 50.000 en

³ Aparte de la prisa incontenible por transformar a Nixon y a la CIA en demonios y, de esa manera, reducir las complejidades de la política tanto interna como exterior a ingeniosos titulares de prensa, los periodistas compartían una inclinación igualmente compulsiva a adoptar a revolucionarios del Tercer Mundo (Ho Chi Minh, Nasser, Castro, Nkrumah, Sukarno, e incluso Mao Tse-tung, eran algunas de sus estrellas fugaces favoritas). Existe otra explicación posible que quizás resulte de especial interés para los chilenos. Los principales creadores de opinión sobre "Chile", tanto en *The New York Times* como en la BBC, tenían un vínculo adicional más preciso. Seymour Hersh, el periodista laureado con el premio Pulitzer por sus "reportajes de investigación", me dijo "sí, comparto" las opiniones planteadas por el Institute for Policy Studies (IPS), con sede en Washington. Los principales apologistas de Allende en la BBC eran el profesor Fred Halliday y Larry Birns, ambos vinculados anteriormente con el IPS. No hace mucho se reveló que uno de los dos codirectores de esa institución recibió fondos de la Cuba castrista, lo cual no resulta del todo sorprendente para cualquiera que haya hecho un seguimiento de lo que produjeron durante los años setenta o más tarde. Tanto Birns como Halliday siguen emitiendo sus opiniones en el servicio mundial de la BBC, pero su insistencia en la teoría de que Allende fue asesinado fue finalmente enmendada, sin comentarios ulteriores, por un corresponsal del cuerpo editorial de la BBC durante una visita a Santiago. (Ambos también justificaron la dictadura de Mengistu en Etiopía, muchísimo más sangrienta y criminal que cualquier régimen contemporáneo de Latinoamérica.)

Hersh informó a los lectores del *The New York Times* que Salvador Allende era un "socialdemócrata", calificativo desdeñado por el propio mandatario chileno, quien, en una extensa conversación que sostuvo con su admirador francés Régis Debray, publicada después, manifestó abiertamente su desprecio por esa tendencia política. Hersh jamás cuestionó ningún

contribuciones a candidatos de diversos partidos, sin que lo supieran los beneficiarios; en 1975 la Comisión Investigadora del Senado hizo circular el rumor —que trascendió a nivel mundial— de que la cifra ascendía a

na de las pruebas irrefutables que apuntaban al suicidio de Allende, ni tampoco consideró la posibilidad de hacerlo.

En reiteradas ocasiones, él me aseguró en tono sarcástico que el *The New York Times* nunca publicaría —sólo lo hizo después que había transcurrido mucho tiempo— una relación de los extraordinarios esfuerzos llevados a cabo para alcanzar un *modus vivendi* con Allende. Sin embargo, en una maniobra que podría calificarse de chantaje, me telefoneó siete años después de aparecido su artículo inicial, en el que se había dado a entender que yo había cometido perjurio, para anunciarme que daría a conocer la verdad sobre mí si yo respondía a algunas preguntas sobre Nixon y Kissinger para un libro que estaba escribiendo en ese momento. *The New York Times* publicó entonces, en primera plana, su inusual retractación a medias. Hersh esgrimió la flagrante mentira de que “nuevas evidencias” lo habían llevado a concluir que, al parecer, yo había dicho la verdad ante el Congreso. Él me dijo, además, que había tenido que “negociar con Abe (Rosenthal, el editor en jefe) para que el *The New York Times* no tuviera que transigir al extremo de publicar un *mea culpa*. Este episodio, según lo supe de primera fuente, motivó que el propietario del periódico adoptara la decisión de jubilar a Rosenthal mucho antes de lo planeado, para reemplazarlo por Max Frankel, un editor que me había escrito seis años antes, en 1976, para señalarme que en efecto yo había dicho la verdad.

En consecuencia, el buque insignia del periodismo estadounidense y pilar institucional de integridad para la opinión pública (y para mí hasta 1974) se vio en la obligación, en medio de la atmósfera hostil de los setenta, de ceder ante un “matón” (término usado por Frankel para referirse a Hersh) de la izquierda marxista, así como de consentir la cobardía autoprotectora de sus editores y la deliberada falsificación de la historia más amplia de Chile. Frankel también explicó que Hersh había acudido a mí como un recurso desesperado, porque el contenido de su libro no sería inteligible si yo no le explicaba “Chile”; luego Hersh volvió a tergiversar los hechos de acuerdo con su método ideológico de fabricación de mitos. (En años posteriores *The New York Times* siguió recurriendo a este matón para darles en el gusto a “fuerzas políticas” internas.)

Muchos se preguntarán por qué no intenté obtener un desagravio en los tribunales mientras los editores del *The New York Times* seguían publicando la versión de Hersh. La respuesta tiene una doble dimensión. La Corte Suprema había permitido que la prensa se amparara en la cláusula adicional sobre protección contra difamación que obligaba a las “figuras públicas” a probar la “intención”; además, tal como señalaron los abogados, se hubiera requerido un millón de dólares de esa época (1973) para demandar al *The New York Times*. En segundo lugar, para entonces todo aquel dispuesto a sustentar la versión de los hechos proporcionada por la Comisión del Senado [Comisión Church] —fuera el Presidente Ford, Kissinger, Colby (el director de la CIA), los Kennedy, sus aliados y adversarios políticos, las empresas implicadas— contribuyó, de una u otra forma, a aislar al personaje quiétesco que yo había llegado a encarnar.

La preeminencia de que gozaba Hersh en *The New York Times* era tan exagerada que otro ganador del premio Pulitzer, Tom Wicker, escribió un artículo sobre Gladys Marín (actual líder del PC chileno), mientras ella realizaba una gira de conferencias en Estados Unidos, elogiándola y describiéndola como “una joven demócrata”, al parecer sin advertir su condición de importante dirigente comunista y leal vocera de Moscú. No menos confuso fue el patrocinio que Enrique Kirberg, rector comunista de la Universidad Técnica de Santiago, recibió de la Universidad de Columbia en Nueva York, ya que por lo visto sus mecenas ignoraban que había utilizado las imprentas de esa casa de estudios estatal para editar gran parte de la propaganda de su partido entre 1969 y 1973. Estos incidentes permiten apreciar la manera en que instituciones respetables pasaban por alto sus propias normas para estar en buenos términos con sus miembros más extremistas.

En *The New York Times* Hersh contaba con el respaldo de Harrison Salisbury, quien en viejos tiempos me había apadrinado, y de Tony Lewis, ambos ganadores también del

US\$ 350.000, ignorando deliberadamente la diferencia por todos conocida entre “autorización” y “gastos”; yo había recortado el ambicioso programa de la CIA hasta disminuirlo a una fracción del original. En 1970 dicha entidad gastó US\$ 35.000 en operaciones encubiertas y US\$ 90.000 en una campaña de propaganda que, según informé por cable a Washington, no sólo permitía advertir a las claras la autoría de la Agencia, sino que además le aportaría votos a Allende, el supuesto blanco de la ofensiva⁴.

premio Pulitzer y extraordinariamente influyentes tanto al interior como fuera del diario. Salisbury, mi primer editor de política internacional, había llegado al extremo de escuchar las opiniones de individuos como Peter Burchett para orientarse. Ambos estaban tan predispuestos en favor de Hersh que incluso se negaron a reunirse conmigo para escuchar un argumento contrario al de su protegido.

⁴ Los autores del Informe de la Comisión Church eran todos muy versados en el proceso de “autorización”, que consta de dos etapas: la primera consiste por lo general en un voto simple, no obligatorio, y luego viene una decisión sobre “gastos” que suele ser un ejercicio mucho más riguroso. Se trata de la piedra angular del Congreso y todo el Poder Ejecutivo depende de ella. En el Informe se recurrió con frecuencia a esos artilugios verbales para desorientar al público. En sus conclusiones se describe a Estados Unidos bajo los gobiernos de los difuntos Johnson y Nixon como un intruso imperialista e insensato, mientras que a John F. Kennedy, el iniciador de la intervención verdaderamente “masiva” (Hersh insistía en usar este adjetivo en sus reportajes de primera plana en *The New York Times*) entre 1963 y 1964, se le permite salir bien librado recurriendo a tres subterfugios: primero, subrayar que el estudio sobre las actividades de la CIA en Chile cubre un período que comienza en 1964 y no en 1963; segundo, limitar a la CIA —a la cual de hecho le cupo un papel muy secundario en la iniciativa en gran escala y a nivel mundial destinada a elegir a Eduardo Frei— la responsabilidad por el enorme programa dirigido por la Casa Blanca para derrotar a Allende en 1964; y tercero, alterar de manera sutil la relación de los hechos con el fin de blanquear la imagen de Allende, de la Unidad Popular y de sus patrocinadores.

Otro ejemplo de menor importancia arroja luz sobre la manera en que la Comisión [Church] manipuló la realidad. En el Informe se asevera que mi actuación en Chile se inició en septiembre de 1967, y luego se alude a una reunión del Comité 303 celebrada días más tarde ese mismo mes, en la cual se adoptaron decisiones en torno a los programas de la CIA. Sin embargo, a la sazón yo aún era embajador en Etiopía, nunca había participado en ninguna reunión sobre programas de la CIA y nunca había oído mencionar el Comité 303. Muchos matices similares se incluyeron en forma planificada para perjudicar a aquellos que osaran poner en tela de juicio los esfuerzos por presentar a Allende como una víctima democrática e inocente de un “elefante salvaje”, y encasillarlos junto a Nixon, Kissinger y las corporaciones. A decir verdad, la mayoría de los miembros más influyentes de la Comisión [Church], al igual que sus asesores, habían apoyado con entusiasmo la masiva intrusión en Chile de la maquinaria de Kennedy entre 1963 y 1964. El principal artífice de “Chile” fue Gregory Treverton, en ese entonces joven académico, cuya carrera en lo sucesivo fue pródigamente recompensada con cargos en el *Establishment*. Él, lo mismo que varios de sus colegas clave del personal, estaba aliado con el principal manipulador tras bambalinas de la Comisión [Church], el senador Walter Mondale, futuro candidato demócrata a la presidencia; mi predecesor, el ex embajador Ralph Dungan, tampoco desempeñó un papel insignificante en la redacción del guión para las actividades de Mondale y su mayoría demócrata. Ambos mantenían vínculos con David Rockefeller, a quien John F. Kennedy había presionado para que participara en la iniciativa chilena, y con prominentes miembros del electorado demócrata que habían desempeñado una función de gran importancia en Chile porque consideraban que Allende era una amenaza para la democracia y la estabilidad regional.

¿Estaba en lo correcto el embajador inglés cuando en 1970, poco después de la elección, me comentó que una o dos décadas de comunismo serían saludables para Chile y otros países latinoamericanos? ¿Fue resultado de una política exterior partidista o de cálculos personales el viraje en 180° de los herederos del Presidente Kennedy en su opinión sobre la Unidad Popular? ¿Por qué China comunista y la Unión Soviética dieron por perdido el gobierno de Allende en los albores de 1973, casi nueve meses antes de que el resto del mundo presenciara el fracaso absoluto de los intentos del mandatario por manipular a su país hasta transformarlo en un Estado socialista como Cuba, y también nueve meses antes de su suicidio?⁵

¿Por qué en 1970 el embajador de Estados Unidos vetó el financiamiento para la campaña de Alessandri? ¿Por qué hizo oídos sordos a posibles conspiradores civiles y militares que procuraban impedir el acceso de Allende al poder, y reveló al saliente gobierno de Frei la identidad del probable asesino de Allende (el mayor Arturo Marshall)? ¿Por qué ignoró a la Casa Blanca cuando inició un diálogo con el gobierno de Allende y le ofreció a éste un *modus vivendi* —un acuerdo sobre el cobre de una generosidad nunca antes vista—, propuesta que sería emulada años más tarde con los bonos Brady? ¿Por qué la administración Nixon respaldó esa dadivosa oferta y el gobierno de Allende la rechazó? ¿Por qué todos los principales colaboradores del embajador fueron ascendidos no bien se fueron de Chile, a pesar del enérgico y creciente desacuerdo del Departamento de Estado, de la comunidad intelectual, de la mayoría de los periodistas, del clan Kennedy y de otros sectores con la percepción que tenía la embajada de los objetivos marxista-leninistas de la Unidad Popular?

⁵ En general, los embajadores de Europa Occidental veían con buenos ojos la elección de Allende, ya que estaban acostumbrados a ver "socialistas" en sus propios gobiernos; además a ellos, al igual que a los adversarios de Allende, Jorge Alessandri y Radomiro Tomic, su carácter, sus gustos personales y sus declaraciones de fidelidad a los principios democráticos les inspiraban tranquilidad. El que Allende fuera masón también convenció a algunos representantes diplomáticos sudamericanos, así como engañó, por ejemplo, al director en Chile de la ITT, Benjamín Holmes, quien a pesar de sus ideas conservadoras señaló a los ejecutivos de la compañía matriz de esta transnacional en Nueva York que él y la firma podían hacer negocios con su compañero de logia. Cuando el señor Holmes fue arrestado por la policía secreta a comienzos de 1971, en una diligencia reservada que se llevó a cabo a media noche, los ejecutivos de la ITT me telefonearon en la madrugada para pedirme que los ayudara a liberarlo.

Una notable excepción a la complacencia europea la constituyó el embajador francés, quien les dijo a sus colegas, en mi presencia, que la situación que se estaba desarrollando en Chile le parecía similar a los sucesos que a fines de los años cuarenta habían transformado a Checoslovaquia en una democracia popular. Él predijo que Allende rechazaría cualquier esfuerzo estadounidense por alcanzar un *modus vivendi*. De todos modos, Francia, lo mismo que Gran Bretaña, entre otros gobiernos, no tardaron en otorgar al gobierno de la Unidad Popular créditos y préstamos.

Tales preguntas —aún hay muchas más— ilustran la complejidad de “Estados Unidos en Chile”, y explican por qué mi país resulta tan desconcertante, salvo para los observadores más agudos.

El origen de “Estados Unidos en Chile” se remonta en cierto modo a los años treinta y mediados de los cuarenta. Las divisiones en ese entonces al interior del Partido Demócrata todavía siguen influyendo en los acontecimientos de hoy. Las diferencias esenciales con respecto al papel del gobierno —el alcance de la intervención estatal y los criterios para asignar recursos según clase, o para equiparar las oportunidades o lograr resultados similares— continúan provocando divisiones entre los principales actores.

En su primer período, Roosevelt pareció rescatar a Estados Unidos de la Gran Depresión, lo que le permitió ser reelegido por una enorme mayoría en 1936. No obstante, a poco de iniciarse su segundo mandato la economía cayó en picada, la bolsa de valores experimentó una baja sin precedentes y el grupo de asesores del Presidente, paralizado por la conmoción, ya no fue capaz de mantener la fe de su partido en la capacidad del Estado para generar prosperidad. El estallido de la Segunda Guerra Mundial los libró de adoptar decisiones muy molestas. También provocó un cambio en el concepto que la mayoría de los norteamericanos, en particular los sindicatos, tenían del Estado, la economía y el crecimiento. La mayor parte de los dirigentes sindicales abandonaron la visión de clase o corporativista e hicieron suya la noción de una economía de libre mercado guiada por el consumo. (Debo reconocer que a mediados de los años cuarenta, pese a que a la sazón ya era un convencido anticomunista, actué como organizador de sindicatos y negociador en la rama de Nueva York del gremio periodístico, dominada por el marxismo.)

Aún siguen agitadas las aguas en la estela que dejaron las divisiones de hace más de medio siglo. Baste decir al respecto que Ralph Dungan y Bobby Kennedy, cerebros de las políticas estadounidenses en y hacia Chile entre 1963 y 1967 —de la idea que Washington se arrogara un papel más activo en la vida política, económica y social de este país— creían en la capacidad del Estado para crear justicia social con crecimiento. Por cierto que ellos deseaban salvar ese abismo siempre latente entre la democracia, en la que cada votante tiene el mismo valor, y el capitalismo, en que cada votante es tratado de manera muy distinta⁶.

⁶ Irónicamente, en mi Informe de 1966 sobre África, en ese mismo período, prevenía contra los intentos de “comprimir el tiempo” mediante soluciones de parche, basadas en cuantiosas transferencias de dinero, equipos o conocimientos técnicos, en países que estaban aún lejos de alcanzar la condición de industrializados. En un libro publicado en 1994 por el Council on Foreign Relations *US Economic Policy Toward Africa*, escrito por Jeffrey

El segundo impulso poderoso de Estados Unidos que afectaría a Chile se originó en 1947. El Presidente Truman revirtió nuestra historia al comprometerlos a mantener a Europa Occidental fuera del alcance de mano hostiles. Los pilares institucionales de Occidente eran la OTAN y el

Herbst), en el cual se analizan las políticas económicas norteamericanas en África, se hace especial mención a mi Informe por su extraordinaria "presciencia", ya que predijo lo que sucedería durante estas últimas tres décadas en el continente y las medidas que verdaderamente era necesario adoptar.

El Congreso estadounidense, en particular a comienzos de los años sesenta, aprobó leyes y reglamentos con una indiferencia casi irreflexiva por la sensibilidad de otras naciones, pero las embajadas tenían la obligación de acatarlos estrictamente. En Santiago, cada mes o trimestre debíamos hacer un seguimiento de casi todas las actividades, desde las medidas macroeconómicas adoptadas por el Gobierno hasta el progreso de cada cultivo, hábitos de control de la natalidad, solicitudes de préstamos, etc. Cualquier miembro del Congreso norteamericano, con determinados intereses personales, podía detectar una anomalía o una tendencia contraria a sus designios y oponer reparos a objetivos generales en la formulación de políticas, o bien acaparar los titulares de la prensa. La tendencia compulsiva de Washington a manejar hasta los aspectos más insignificantes contribuía a que los historiadores, científicos políticos, periodistas y, por cierto, los políticos fuesen incapaces de comprender que un embajador pudiera decidir, como cualquier ciudadano común, responsabilizarse de sus propios actos. Como le señalé a Richard Nixon en mi oficina de Addis Abeba en 1966, yo no "trabajo para ningún político, ni para el Departamento de Estado, sino que únicamente para el pueblo que paga mi sueldo, para el contribuyente". Un colega de la embajada comentó: "No conoce las reglas del juego". Sin embargo, los asuntos de vida o muerte nunca son un juego, como tampoco lo son los problemas éticos fundamentales.

Frederick Chapin, el funcionario del Servicio Diplomático y Consular que supervisaba los asuntos chilenos en el Departamento de Estado, me escribió una carta personal poco después que asumió Nixon, en 1969, para informarme que una de las primeras medidas del mandatario norteamericano sería eliminar de la agenda la visita de Estado del Presidente Frei programada para ese año; en la carta también se indicaba que el señor Nixon les había recalcado a dos funcionarios, el Secretario de Estado, William Rogers, y el Secretario de Estado Adjunto, Charles Meyer, que él no sentía ningún aprecio por los demócratacristianos. De todos modos, tal como lo demostraron los hechos, esta revelación no influyó ni en las políticas ni en las acciones de la embajada, aunque sí podría explicar la despreocupada indiferencia que manifestó el Departamento de Estado frente a una posible victoria de Allende en 1970, hasta que Kissinger lo hizo entrar en acción; aun así, buena parte de esta actitud se propagó desde las máximas autoridades hacia los niveles inferiores, comenzando por el Secretario Rogers y la antipatía visceral que sentía por las opiniones de Kissinger y el respeto que le inspiraba un personaje latinoamericano tan destacado como el Secretario General de la OEA, Galo Plaza, quien en un comienzo fue un estridente partidario de Allende. Otro factor que no ha sido reconocido tiene que ver con los estrechos vínculos entre Rogers y sus otrora clientes en el *Washington Post*, cuyo editor, Ben Bradlee, había realizado, y seguiría cumpliendo, útiles tareas de encubrimiento para los Kennedy.

En 1972 en Washington, al salir del Hotel Madison, donde acababa de almorzar con Raúl Prebisch, el funcionario más importante de la ONU en Latinoamérica, me encontré con Bradlee y Phil Geyelin, el responsable de la página editorial. "¿Acaso no estuvimos haciendo algo similar a lo de 1964 en Chile?", preguntó Geyelin mientras los tres nos dirigíamos hacia el *Post*. "No, lo de ahora fue algo de poca monta", respondí.

Durante esa caminata, Geyelin, un meticuloso, experimentado y excelente periodista, advirtió que *The New York Times* había reaccionado de manera visceral en contra de Nixon. "Estamos esperando nuestra oportunidad, pero ya lo atraparemos", anunció con profética exactitud.

Traigo a colación estos comentarios para demostrar que los periodistas a) efectivamente disponen de información (por ejemplo, en 1964) que no publican, y b) evidentemente

Plan Marshall; las primeras batallas se libraron en Italia, Grecia, Turquía y, por circunstancias fortuitas, en Yugoslavia. Los elementos en juego eran de carácter estratégico —el control del Mediterráneo, el Adriático y el Egeo, corredores marítimos vitales hacia el petróleo del Medio Oriente, hacia la India y el Lejano Oriente.

En apariencia, las elecciones de Italia en 1948 y las de Chile en 1964 presentan similitudes extraordinarias, ya que en ambas una izquierda muy poderosa se enfrentó con una nueva y emergente fuerza política. En Italia, Togliatti, a la cabeza del Partido Comunista más grande del mundo occidental, era el oponente de Alcide de Gasperi, el líder demócratacristiano. Estados Unidos movilizó todos sus recursos políticos disponibles y puso en actividad a todos los sectores importantes de la sociedad norteamericana para asegurar una victoria lo más amplia posible, para luego continuar con aportes de miles de millones de dólares en préstamos y donaciones para que Italia se volviese a poner de pie. Así nació una nueva dinastía demócratacristiana que gobernaría Italia por varias décadas. Como periodista informé sobre esa elección desde Turín y Milán.

Al mismo tiempo, entre 1946 y 1948 el régimen yugoslavo de Tito financió, abasteció y asesoró en Grecia una campaña bélica dirigida por los comunistas para derrocar a la clase política dominante. Las fuerzas militares norteamericanas salvaron a Grecia, en gran parte, porque a fines de 1947 Stalin se volvió secretamente contra Tito, para sorpresa de todos los funcionarios norteamericanos en Belgrado, excepto de uno⁷. El embajador

adoptan agendas demasiado partidistas que afectan tanto la cobertura como los reportajes. En contraste, en mis comentarios desde Chile yo criticaba duramente a los tres candidatos presidenciales por igual.

Bradley en particular trabajaba aplicando un doble criterio. Como vocero de la embajada estadounidense en Francia negó haberme mentido en nombre del embajador (James Dunn) en tres oportunidades distintas, en cada una de las cuales hubo más de un testigo en mi oficina, y en cada una de las cuales siempre le advertí que si sus declaraciones resultaban ser un infundio, como en realidad lo fueron, yo divulgaría “a través de los cables” la falsedad y la identidad de su instigador para que se enteraran nuestros 5.000 clientes. Cuando “Chile” salió a la luz entre 1974 y 1975 les recordé a los periodistas del *Washington Post* que su editor, al igual que los miembros del equipo periodístico que investigaba el Caso Watergate, también había intentado “ocultar información” durante su carrera gubernamental, mientras que en esa época yo hice todos los esfuerzos posibles para que me permitieran testificar.

⁷ Ese funcionario era Robert Borden Reams, encargado de negocios de la embajada estadounidense en Belgrado durante la época en que Stalin excomulgó a Tito, medida anunciada por el Cominform en Praga el 30 de junio de 1948. Él fue el único de todos nuestros enviados en Europa Oriental que percibió la importancia del cisma y vislumbró la posibilidad de que Tito sobreviviera. Debido a que puso a la embajada en una situación en la que no tenía defensores, y debido a que sus opiniones contrastaban con las de su embajador ausente, su carrera futura fue sometida a una poco halagadora revisión de desempeño por parte de su muy disgustado superior. Con todo, un nuevo embajador, George Allen, quien me había solicitado que me incorporara en la embajada como su asistente, nos envió a mí y a Reams a Atenas, destino que encubrimos al comienzo permaneciendo por un tiempo en Roma.

de Estados Unidos en Yugoslavia nos envió a mí y a ese diplomático a Atenas, en 1950, con la secreta misión de iniciar negociaciones entre el dictador comunista Tito y el régimen derechista griego, que aquél había procurado destruir. Llegamos a una solución satisfactoria —y también ellos, por lo tanto.

Hoy día está de moda burlarse de los “combatientes de la Guerra Fría”. Incluso economistas inteligentes afirman que Estados Unidos estaba obsesionado con el comunismo, o que era presa de un miedo irracional ante una posible invasión del Ejército Rojo a Europa Occidental. No pocos norteamericanos, entre ellos personajes influyentes, sufrieron esa paranoia. En efecto, el anticomunismo era el tocos adhesivo que mantenía unidos a los disímiles grupos de Occidente que se oponían a la expansión del poder soviético. Así pues, los políticos explotaban dicha causa para cumplir una variedad de objetivos. Sin embargo, la mayoría de los funcionarios responsables y de los observadores comprendieron por qué el caso de Yugoslavia, entre otros factores, demostraba la falsedad de ambas acusaciones.

El gobierno comunista de Tito, por un lado, una vez que dejó de responder a las directrices políticas del Kremlin recibió nuestra ayuda incondicional durante muchos años, mientras que en 1947, por otro lado, Stalin lo acusó de correr imprudentemente el riesgo de desencadenar una tercera guerra mundial por su afán de apoderarse de Grecia. Lo cierto es que en todas las confrontaciones Stalin y sus sucesores evitaron entrar en una guerra con Estados Unidos. La verdadera preocupación de los líderes políticos occidentales —se tratara de Eisenhower, De Gaulle o Adenauer— era la expansión del poder de Moscú por medios indirectos. El Kremlin sin duda intentaría llenar cualquier vacío que quedara indefenso o fuera ignorado. Pero como la OTAN era cada vez más poderosa y ya se contaba con un arma nuclear, el principal temor era que la combinación de una ofensiva política interna y una presión soviética externa pudieran empujar a su autodestrucción a un país escogido como objetivo, incitándolo a cometer actos no sólo contrarios a los intereses occidentales sino, además, contrarios a sus propios intereses⁸.

Si se induce a una nación a derrochar sus recursos, o si se socava su voluntad de resistencia, o si se utilizan ambas maniobras, no hay necesidad de efectuar una invasión. Ésta fue la estrategia empleada en Europa Occi-

⁸ Si me hubiera inquietado una posible instalación del Ejército Rojo en Europa, no le hubiera pedido a mi esposa en 1950 que residiera primero en Yugoslavia y que luego se trasladara a una casa en Berlín, situada a unos cuantos cientos de metros de la frontera con la zona de Alemania entonces bajo dominio soviético.

Le había escrito a ella en 1949 desde Skoplje, la capital de Macedonia, diciéndole que el comunismo caería por su propio peso.

dental y en Yugoslavia en los años cuarenta y cincuenta, en Etiopía en los años sesenta y setenta y, por supuesto, la que tenían en mente algunos aquí en Santiago. Un aspecto esencial de la táctica de Moscú consistía en adular al ejército de un país vecino: Albania o Hungría y Rumania en los años cuarenta, Alemania Oriental en los cincuenta, Somalia en los sesenta o, por cierto, Perú en los setenta, cuando Allende y Brezhnev tentaron reiteradamente a las Fuerzas Armadas chilenas con la oferta de una enorme partida de armamento.

El Presidente Kennedy echó mano de la fórmula italiana para aplicarla en Chile en 1963. Castro y Krushev, por una parte, y la jerarquía católica en Roma, por la otra, pusieron a este país en la mira de Kennedy. De la confrontación cara a cara con Estados Unidos en el Caribe, Moscú había emergido con sus fuerzas militares legitimadas al interior de la propia Cuba; la URSS había asegurado la supervivencia de Castro y ambos se habían posicionado para reducir y luego reemplazar la influencia estadounidense en una América Latina que ardía de descontento. Pocos años antes el Vaticano había concentrado su atención en este continente. La Santa Sede reaccionó ante un llamado de alerta mundial dirigido a influyentes católicos por un distinguido sacerdote extranjero en Santiago —una advertencia elocuente de que la Iglesia estaba perdiendo terreno frente a lo que él denominaba “laicismo, marxismo y protestantismo”⁹.

En 1963 el FRAP encarnó los temores de Washington y Roma, los que no estaban desconectados entre sí. En contraste, Eduardo Frei [Montalva] y el PDC parecían constituir una apuesta sumamente atractiva, un equipo que podría transformarse en la base de un contragolpe para enfrentar a La Habana y Moscú: una revolución en libertad que proporcionaría un polo de atracción opuesto.

De modo que una vez más la Casa Blanca movilizó todos sus recursos, esta vez tanto externos como internos. Quería que Frei alcanzara una holgada mayoría absoluta, no sólo relativa. El objetivo de este esfuerzo a escala realmente internacional era establecer una dinastía política de modo que Chile se convirtiera en un país lo suficientemente estable y confiable como para que valiera la pena una inversión estadounidense económica y social de US\$ 1.250 millones; así Chile encarnaría en los ámbitos político y

⁹ El clérigo era monseñor McGrath, más tarde arzobispo de Panamá, quien mantenía excelentes vínculos con el padre del Presidente Kennedy, con la jerarquía eclesiástica estadounidense y con muchas influyentes personalidades laicas de todo el mundo. A la sazón, él ocupaba el cargo de decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Encontré su carta en una carpeta de Dungan, a la que nadie había prestado atención, mientras revisaba los archivos de la embajada a poco de llegar en 1967.

social los ideales progresistas de sus mecenas norteamericanos. Para garantizar el éxito de lo que en realidad era más bien un programa compartido entre el PDC y el Partido Demócrata y no una relación entre Estados Unidos y Chile, Ralph Dungan, en efecto, se asignó a sí mismo el cargo de enviado del Presidente Johnson en Chile después de las elecciones de 1964¹⁰.

Esta semana se cumplen 29 años desde que mi esposa y yo llegamos a Santiago, la semana en que murió el Che Guevara. Necesité sólo tres meses para concluir que las políticas de Estados Unidos eran insostenibles, sus suposiciones incorrectas y sus metas inalcanzables. Chile no era Italia, Sudamérica no era Europa y el PDC de Frei de 1967 no guardaba ninguna similitud con el de De Gasperi en 1948. En términos políticos y económicos era claro que el gobierno chileno y el de Estados Unidos no alcanzarían sus objetivos oficiales comunes. La economía se encontraba estancada, la inflación una vez más exhibía una tendencia al alza, la política agrícola era espantosa, las tensiones sociales se agravaban, el PDC estaba desgarrado

¹⁰ Dungan ocupó durante el gobierno de Kennedy "la oficina de la esquina" en la Casa Blanca, ubicación que para los observadores de Washington es un símbolo de considerable poder tras bambalinas. Sólo los funcionarios con una lealtad a toda prueba se instalan en ese espacioso lugar investido de influencia; sólo ellos se enteran de todos los secretos relativos a las operaciones políticas más delicadas que el Jefe de Estado efectúa a nivel interno. Como la presencia del Fiscal General, Robert F. Kennedy, era mucho más imponente, las actividades de Dungan casi no fueron objeto de publicidad o de inspección, lo cual aumentó el grado de influencia de sus funciones.

Educado por los jesuitas, en su juventud Dungan había demostrado rápidamente al senador John F. Kennedy su inteligencia, su discreción y una agudeza ágil y formal, característica esta última tan apreciada por el clan de Massachusetts. Washington lo consideraba uno de los miembros de la "mafia irlandesa" de Kennedy, un pequeño grupo de asistentes que formaban el equipo que lo había acompañado en la ruta hacia la Oficina Oval.

Las responsabilidades de Dungan en los días de Camelot hablan de su poder: los distritos electorales clave de los demócratas, la educación, los asuntos laborales y las relaciones con los católicos romanos, a quienes él, más que ningún otro asesor, les garantizó su apoyo en asuntos políticos y legislativos. La política exterior, un ámbito poco usual para la "oficina de la esquina", también se incluía dentro de su competencia. Latinoamérica era su "niño mimado". Como no era un área que acaparara el interés del Secretario, Dean Rusk, o del Subsecretario, George Ball, Dungan analizaba todas las decisiones sobre políticas, seleccionaba o aprobaba todos los nombramientos de embajadores o directores de la AID, y supervisaba programas de la CIA. El alcance de su poder al interior del Departamento de Estado se pudo apreciar en 1962, cuando escogió, de otro sector, al funcionario responsable de toda la administración y asuntos de personal. Ese año Dungan puso en práctica la decisión de Kennedy de incorporar a un hombre público y a un funcionario de carrera representante de otro organismo gubernamental en los paneles de promoción que se reunían una vez al año para decidir qué miembros del Servicio Diplomático y Consular "ascendían o eran expulsados".

Él me escogió para participar en el panel más importante, que analizaba los antecedentes de los actuales y futuros embajadores; asimismo, a fines de ese año me designó como enviado de Kennedy a Etiopía, donde Estados Unidos mantenía la presencia oficial más masiva en África, un continente que de vez en cuando caía dentro de la órbita de Dungan.

por graves divisiones y sólo el Partido Comunista era una colectividad unificada, disciplinada y adecuadamente dirigida. En consecuencia, la dinastía era una gran ilusión.

Washington estaba demasiado obstinado en sus opiniones como para dignarse a escuchar verdades tan descarnadas, en particular cuando malas noticias desde Vietnam y otras partes comenzaban a afectar a la nación estadounidense. Es más, Dungan me había reclutado para trabajar en el gobierno norteamericano, y había demasiados norteamericanos y chilenos influyentes mirando por encima de mi hombro.

Era preciso aplicar, por consiguiente, una política completamente nueva, de una manera casi subrepticia o, como quien dice, deslizarla por debajo de la puerta. Sólo en retrospectión podría alguien deducir el cambio y su trascendencia. El Presidente Johnson, el Secretario de Estado, Dean Rusk, y el Subsecretario, George Ball, habían respaldado con entusiasmo ese *modus operandi* en Etiopía, puesto en marcha por mi propia iniciativa.

Para sintetizar mis acciones inmediatas, nuestra relación con un solo partido político se desdibujó, desde un vínculo de partido a partido se pasó a uno de Estado a Estado; al mismo tiempo se establecieron contactos con otros grupos y se escucharon sus opiniones; la presencia oficial estadounidense en Chile experimentó una drástica reducción (18%); su hiperactiva presencia pública disminuyó casi a cero; el análisis preliminar para la concesión de futuras garantías de las inversiones privadas norteamericanas se tornó mucho más riguroso; y se comenzó a aplicar un nuevo enfoque con respecto al futuro de la Gran Minería, de manera que el cobre se convirtiera en la viga maestra de una política muy distinta. En 1967 el metal rojo aportaba casi el 70% de los ingresos por exportaciones y representaba un 15% del presupuesto del país, aunque la mayor parte de este recurso natural estaba en manos de empresas estadounidenses¹¹.

¹¹ Sólo un 10% de la reducción del personal estadounidense fue producto de las medidas que adopté poco después de llegar; otro recorte de un 8% se efectuó a comienzos de 1968 cuando el Secretario de Estado, Dean Rusk, ordenó disminuir el personal en todas las embajadas del mundo.

Un memorándum de Washington firmado por Herbert Salzman, el entonces Jefe de División en la AID (que más tarde se transformó en la OPIC), y por mí, estipulaba que las futuras solicitudes de las empresas mineras con miras a realizar inversiones deberían someterse a una revisión especial. Sólo después de llegar a Chile descubrí que la cuarta parte del total mundial de las garantías estadounidenses para inversiones privadas habían sido otorgadas a firmas que invertían en Chile, algunas de ellas en respuesta a una intensa presión ejercida por el Senado y la Casa Blanca y contra la opinión del director de la AID en cuanto a su legalidad.

Le dije a Salzman que en mi corta estadía en Chile, sin embargo, me había convencido de que los contribuyentes norteamericanos estaban corriendo un riesgo demasiado grande como para que se siguieran haciendo negocios como antes. El futuro vicepresidente ejecutivo

Estas nuevas medidas de 1967 y comienzos de 1968 —cada una de ellas tomada bajo mi responsabilidad— tenían dos finalidades: desenlazar a Chile y a Estados Unidos de un abrazo mutuamente peligroso, incestuoso y sofocante, y *otorgarle independencia a Chile* para que se hiciera más responsable de sus decisiones y, también, para facilitarle los medios adicionales que le permitiesen adoptar una adecuada determinación. Nunca se interrumpió el flujo en el recargado canal de la ayuda. Tampoco se ejerció presión de ningún tipo a ningún chileno.

La idea respecto del cobre, que cobró forma en la nacionalización pactada de 1969, ofrecía la posibilidad de desbaratar el arma de la izquierda (la “nacionalización”) y, al mismo tiempo, mellar su filo borde de nacionalismo antiestadounidense. No menos importante, les proporcionaría a las Fuerzas Armadas, en ese entonces desprovistas de casi todo, más fondos en virtud de la ley del cobre, permitiéndoles de este modo seguir cumpliendo su función profesional y apolítica. En mi opinión, se estaba creando una mezcla potencialmente explosiva: una clase política imprudente, ciega ante las posibles consecuencias de su politiquería ensimismada, y un Ejército intranquilo, de modesta magnitud, artificialmente desmejorado en su status y privado de sus necesidades mínimas. Un cambio en la propie-

de la OPIC se sintió muy aliviado al enterarse de los cambios de dirección que adoptaba la embajada.

En una actitud que permite advertir el aprecio que sentía por mí, después de leer el Informe sobre África el Presidente Johnson me invitó cenar en el río Potomac junto a él, su esposa y su vocero Bill Moyers, a bordo del yate oficial. Durante las siguientes 72 horas Moyers me pidió en llamadas telefónicas sucesivas, a nombre de Johnson, que aceptara los cargos de a) Jefe de la Comisión de Prácticas Laborales Equitativas, b) Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Públicos, y por último c) reemplazante suyo como portavoz de la Casa Blanca. Cada una de las ofertas fue rechazada por tratarse de funciones “demasiado políticas” para mis capacidades y preferencias. “Entonces que se pudra en Etiopía”, les dijo luego Johnson a sus asesores. Durante la visita de Haile Selassie a Washington un año después, en un encuentro fortuito cara a cara con Johnson, tuve la oportunidad de justificar mi negativa de un modo que me permitió reconquistar el favor del mandatario.

La estimación que sentía Kennedy por mí podría apreciarse en dos sucesos inesperados ocurridos no mucho después de su asesinato. Dos jóvenes damas asistentes de Kennedy, conocidas en Washington como “Fiddle” y “Faddle”, fueron enviadas de la noche a la mañana a Addis Abeba para que me sometieran a una vigilancia protectora. Ellas permanecieron por espacio de varios meses sin que en ninguna parte se divulgara el menor detalle sobre su presencia, por lo que pudieron regresar de manera discreta a Estados Unidos.

En segundo lugar, Robert F. Kennedy me envió, poco después de mi destinación a Chile, una carta escrita de su puño y letra en que señalaba: “¡Por fin hay algo con lo que estoy de acuerdo!” (Richard Nixon me telefoneó casi al mismo tiempo para expresarme sus felicitaciones.)

Dicho sea de paso, por alrededor de tres años en ningún momento formulé o permití que se emitiera al interior de la embajada algún comentario crítico sobre Dungan o los presidentes Kennedy y Johnson. Sólo cuando Dungan publicó en el *Washington Post* una carta en la cual exigía que me retiraran debido a mi hostilidad hacia Allende decidí sacarme la mordaza que me había puesto yo mismo.

dad norteamericana del cobre, hacia una participación minoritaria, podría ser una carambola a tres bandas: Estados Unidos se libraría de una apuesta condenada al fracaso; ingresarían recursos a las arcas de Chile y de sus Fuerzas Armadas en una época en que la ayuda norteamericana se estaba agotando; y se diluiría la campaña antiestadounidense de la izquierda en contra del imperialismo y el capitalismo.

La política de Washington nunca se apartó de los nuevos objetivos. En 1969 el Presidente Nixon hizo suya la política de bajo perfil para toda Latinoamérica; yo fui el único embajador no de carrera de la era Kennedy-Johnson al que mantuvo en su cargo, con la venia del saliente Secretario de Estado, Dean Rusk, y del servicio de carrera; en efecto, para demostrarme que aprobaba el convenio del cobre de 1969, en que yo había actuado como intermediario, no tardó en ofrecermelo por cable (por intermedio del Subsecretario de Estado) un traslado a Caracas como embajador; y cuando decliné el nombramiento me convocó de inmediato a Washington con el objeto de que yo reprodujera a escala mundial lo que había hecho para el Presidente Johnson en África —recomendaciones, dicho sea de paso, que se pusieron en práctica más de una década después, lo mismo que sucedió con el Informe sobre África.

Las consecuencias políticas del acuerdo sobre el cobre fueron en verdad decepcionantes. En su empeño por congraciarse con los comunistas, Radomiro Tomic criticó el acuerdo al lanzar su campaña por la presidencia (como abanderado del PDC). Y a pesar de que las encuestas de la CIA mostraban a Alessandri con una cómoda ventaja de 10% o más, al parecer ellas estaban violando una regla básica de la política y la economía: la tiranía de las cifras. ¿Por qué, preguntaba yo en mis cables, el 39% de los chilenos que votó por la izquierda en 1964 abandonaría a un Allende que aparecía fortalecido gracias a los líderes corruptos del Partido Radical y otros? ¿Por qué un electorado con una proporción tan alta de jóvenes decidiría votar por un candidato tan anciano como Jorge Alessandri? En su calidad de segundo de la embajada, Harry Schlaudeman —honrado por el Presidente Bush en 1992 con la distinción civil más alta de los Estados Unidos— le dijo al profesor Abraham Lowenthal, eminente, aunque desoído latinoamericanista: “El embajador era el único en la misión diplomática que creía en el probable triunfo de Allende”¹².

¹² A mediados de 1970 el Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Valdés, trató de conseguir apoyo estadounidense para reemplazar a Tomic como candidato del PDC, cuando ya resultaba evidente para todo el mundo, excepto para el abanderado, que éste carecía de toda posibilidad de ganar o incluso de llegar segundo. Los comunistas habían contribuido a aumentar las esperanzas de Tomic cuando, con gran disimulo, ordenaron a sus huestes que

Schlaudeman y tres jóvenes funcionarios de la sección política de la embajada pronosticaron una pequeña mayoría relativa de Alessandri sobre Allende, con Tomic en un modesto tercer lugar. Cuando la votación real demostró que se habían equivocado por menos de un 3%, cablegrafíé un mensaje a Washington señalando que ellos habían ajustado sus cálculos para acomodarse a mis preferencias. Como les expliqué a Schlaudeman y a Townsend Friedman, mis manos derecha e izquierda, era necesario proteger a los funcionarios del servicio diplomático frente a una inevitable reacción de disgusto. Si yo hubiera previsto el vergonzoso comportamiento disfuncional de las elites en Washington, de los historiadores en las universidades y científicos políticos, así como de los editores y reporteros que más tarde estuvieron dispuestos a participar en una orgía de fabricación de mitos, jamás hubiera intentado esa maniobra¹³.

asistieran a la primera concentración masiva organizada por los partidarios del aspirante de la DC.

El historial de Valdés en sus negociaciones con el embajador Dungan también se detalla en los cables enviados por este último. Sin embargo, su maquinación de 1970 contaba con el poderoso respaldo de altos dirigentes del PDC, desesperados por evitar que este partido perdiera todo el poder a manos de Allende. Entre otras personas, Valdés me había dicho que “el socialismo es el futuro y el capitalismo el pasado”. Tras la elección de Allende, el mandatario y Castro allanaron el camino para que Valdés fuera designado jefe de la división latinoamericana del Programa de Desarrollo de la ONU, donde él contrató después a Larry Birns (véase nota N° 4) como asesor.

Tomic trató de afrontar una realidad que resultaba cada vez más ostensible —sus escasas posibilidades de triunfo— recurriendo a una estrategia igualmente llena de dobleces y que provocaba divisiones en el partido. A espaldas de su colectividad celebró un acuerdo preelectoral secreto con Allende, en el que ambos se comprometían a unir fuerzas para evitar que el Congreso designara presidente a Alessandri, por la vía de que el Congreso ejerciera su derecho constitucional de escoger al candidato que llegara en segundo lugar si ninguno alcanzaba una mayoría absoluta. La CIA denunció este pacto, y el ala derecha de los demócratacristianos de Tomic puso en práctica un plan extremadamente complejo (del tipo “Rube Goldberg”), destinado a lograr que el Congreso eligiera a Alessandri, para que luego éste renunciara de inmediato, con lo cual se convocaría a nuevas elecciones; Frei, que gozaba de una abrumadora popularidad, podría entonces postular de nuevo a la jefatura de Estado y triunfar. Estos miembros del PDC me pidieron que no revelara su iniciativa a Washington —solicitud que se basaba, según deduje en ese momento y más tarde confirmé, en su conocimiento de que el contenido de mis cables se estaba filtrando a espectadores no oficiales.

Del mismo modo, asumí mi responsabilidad por la frase tristemente célebre “ni una tuerca ni un tornillo”, mencionada en un cable con información solicitada por el Presidente Frei a fin de sondear el parecer del Ejército en caso de que Allende fuera elegido. De todas maneras, era inevitable concluir que un gobierno de Nixon no permitiría que se entregara ningún tipo de ayuda al mandatario socialista, y que éste, por su parte, intentaría conseguir armas soviéticas, como efectivamente lo hizo. Aun así, la divulgación de la frase sirvió para que los funcionarios de la Comisión Church consiguieran su objetivo de retratarme como un “hombre de Nixon” renuente a negociar, y así socavaron mis esfuerzos para lograr que se diera a conocer una versión oficial exacta de lo afirmado.

¹³ En comparación, el reciente sondeo “científico” para la elección presidencial en Estados Unidos arrojó un error colosal de 10% para el *The New York Times*, y no menos de 4% para las tres principales cadenas de TV; todas estas organizaciones se habían burlado del error reportero y poco científico de nuestra embajada, de algo menos del 3%.

La segunda mitad de 1970 —la fuente de tanto bochorno para Chile, para EE UU y para mí— constituye, como escribió Alfred Tennyson, “una mezcolanza de instancias”. El proceso adquirió preeminencia y se ignoró la substancia. Nadie que buscara la verdad podría encontrar la ruta en medio de esa maraña de contradicciones, elementos distractores, pistas falsas, instrucciones erróneas que envolvían a una y otra cita de las comunicaciones oficiales, de las investigaciones del Senado y de las memorias.

Lo anterior explica por qué el hecho de impedir deliberadamente que yo declarase ante la Comisión Church durante sus audiencias secretas de investigación, que duraron varios meses, fue “un error”, como recién un año después lo admitió públicamente ante sus colegas su propio abogado jefe. Un error ético, moral, judicial. Sólo después que tanto yo como mi país recibimos ese violento golpe decidí poner fin a cuatro años de silencio y estallé en público de manera poco diplomática. (La Comisión [Church] no sólo había manipulado y ocultado pruebas que, entre otras cosas, acababan por manchar mi historial, sino que además su personal asesor y algunos de sus miembros hicieron circular las calumnias más infames para intentar silenciar mis protestas¹⁴).

¹⁴ El abogado jefe era F.A.O. Schwarz, Jr., cedido en préstamo a la Comisión por su prestigioso estudio jurídico de Nueva York. Él hizo uso de la palabra el 16 de noviembre de 1976 durante una reunión vespertina del Colegio de Abogados de Nueva York, entonces presidido por el futuro Secretario de Estado, Cyrus Vance, y cuya sede quedaba a sólo cinco minutos de camino de las oficinas del *The New York Times*, cuyos reporteros ignoraban que se me había cursado una invitación. Una vez concluido el orgulloso recuento de Schwarz sobre cómo la Comisión había contribuido a que las actividades del FBI y de la CIA cambiasen de curso en el futuro, el orador estuvo dispuesto a responder preguntas. Cuando se agotaron las consultas me puse de pie y solicité autorización para plantear una interrogante, a lo que Schwarz accedió sin demora. Lo que yo quería saber era por qué la Comisión me había excluido sólo a mí de entre todos los principales actores, y por qué había hecho caso omiso de mis peticiones para testificar. “Fue un error”, contestó él sin mayores explicaciones.

Tras la reunión, Schwarz me dijo que no se había pretendido que la exclusión “fuera *ad hominem*”. Por cierto. Yo simplemente me había lanzado al paso de la locomotora de un conglomerado de intereses políticos y especiales, no menos partidistas que personales, que avanzaba a embestidas hacia un objetivo que se presentaba como el interés nacional. Con todo, pese a su calidad de distinguido abogado y funcionario judicial, Schwarz no detectó nada inmoral, poco ético o ilegal en la ocultación deliberada de testimonios en un proceso cuasijudicial, y en la recusación de un testigo presencial, por así decirlo, de un hecho que, según habían dado a entender a la opinión pública él y sus colegas de la Comisión, tenía un carácter penal. Asimismo, la falsificación de la documentación oficial analizada, con el fin de llegar a un veredicto prefabricado, no le pareció a Schwarz más que un acto “equivocado” de poca trascendencia.

La intervención de este prominente demócrata refleja una actitud acorde con las resueltas maniobras que está efectuando el actual gobierno demócrata tendientes a aplazar las revelaciones o a ocultar información sobre documentos y actividades de sus funcionarios que podrían incriminar al Ejecutivo. Se trata de una situación que, como la opinión pública ya está habituada a prever, resulta cada vez más normal en la clase política dirigente de Washington, y que ha contribuido en gran medida a que el ciudadano común sienta menos aprecio por aquella, como yo les había advertido por carta a Schwarz y a Church. Cabe hacer notar que Schwarz y otros miembros clave del equipo tenían en común un historial que incluía una vinculación más que informal con la CIA.

Nadie contribuyó más que yo —debo reconocerlo con franqueza— a la confusión de los registros oficiales. O, en forma más deliberada, durante esa crítica segunda mitad de la década de los setenta cuando el gobierno estadounidense comenzó a centrar su atención en las elecciones chilenas, especialmente en la posibilidad —que yo había planteado con insistencia— que Allende ganara. En Washington se reprodujeron exactamente las mismas pugnas ideológicas, partidistas y mutuamente destructivas de Santiago. La Guerra de Vietnam, las revueltas estudiantiles, las antipatías entre los bandos de Kennedy y Nixon; la recíproca hostilidad entre Kissinger y el Secretario de Estado, William Rogers, los partidos del Congreso en medio de sus campañas de reelección, sin olvidar a un sinnúmero de partes interesadas a nivel privado, incluidos los chilenos. Todos los actores deseaban que Estados Unidos actuara de una manera favorable a sus respectivos intereses.

La recompensa inmediata era el control de los sucesos en Chile: tirar y aflojar la mano de EE UU. Sólo dos personas, Schlaudeman y Friedman, comprendieron la táctica empleada para impedir que disputas tenaces al interior de EE UU pusieran en riesgo nuestras responsabilidades fundamentales: salvaguardar vidas y propiedades estadounidenses en medio de una situación muy riesgosa, y proteger la posición internacional de nuestro país. ¿Por qué permitir que sectores partidarios en Washington se arrogaran una vez más decisiones que competían sólo a los chilenos?

Richard Nixon había pasado tres días en mi residencia de Addis Abeba. La verdad es que al final de su estadía me ofreció ser su asistente de política exterior, como parte de un equipo de cuatro miembros que estaba formando en esa época con miras a proclamar su candidatura a la Casa Blanca. Su participación en el gran debate sobre “quién perdió China” me era muy conocida; como también me era familiar su animosidad hacia Frei, el PDC, los Kennedy y, por supuesto, Allende. Si yo podía predecir con facilidad cuál sería su reacción frente a un triunfo de Allende, él parecía haber olvidado por qué los Kennedy me habían nombrado embajador; en 1962 yo los había salvado a ellos y a mi país de inmiscuirse en lo que se anticipaba como una crisis en torno a Hong Kong, mediante una resuelta y sencilla iniciativa emprendida por encargo del Secretario, Dean Rusk, y de su Subsecretario, George Ball. (Al igual que en el caso anterior de la misión secreta en Grecia en 1950, jamás se filtró a la prensa palabra alguna sobre la misión que a mí —en ese entonces todavía un ciudadano común— me habían encomendado Ball y Rusk: resolver la crisis —que mereció titulares en los informativos— generada por decenas de miles de chinos continentales que de improviso afluyeron a Hong Kong con la aprobación tácita del gobierno comunista de Pekín.)

A diferencia de Nixon, yo había concluido que el Presidente Frei, el líder constitucional antes, durante y por 40 días después de la elección, era la figura clave. Lo reiteré una y otra vez en mis cables. Esos cables formaron parte del muro de defensa que erigí para mantener a raya a Washington, y para hacer a Frei y a los chilenos responsables de sus acciones. “Track I y Track II” representan los ejemplos más tristemente célebres de las engañosas maniobras que realicé con el fin de ganar tiempo y detener a los potenciales entrometidos en Washington. Ambas (Track I y Track II) se propusieron con anterioridad a la elección, cuando yo era objeto de intensas presiones para que permitiera que la CIA interviniese en favor de Alessandri. Sin embargo, antes y después de los comicios yo descarté Track I y Track II en varios cables, en uno de los cuales los calificué de “intrigas caribeñas” sin sentido que formaban parte de lucubraciones fantasiosas previas a la realidad de la elección.

Diffícilmente otra embajada envió más informes o comentarios día a día, cuyo objetivo era inmovilizar a los destinatarios con una avalancha de palabras, para así desalentar cualquier aventura, por un lado, y evitar que cedieran ante las adulaciones de la UP o de un Tomic o de un Valdés, por otro lado. Asimismo, ninguna otra legación fue evaluada tan positivamente como la nuestra cuando un embajador de carrera nos inspeccionó por espacio de un mes a mediados de 1970¹⁵.

¹⁵ El Informe de Inspección de la embajada, evacuado en mayo de 1969, anticipó con profética exactitud el drama de la información asimétrica que se desató poco después entre Washington y yo. Fue redactado por un embajador de carrera, James K. Penfield, a quien nunca había conocido, y quien ya antes, a raíz de un artículo que escribió sobre la materia, había adquirido una reputación de ácido crítico de los activistas designados por conductos políticos como yo. Sostuvimos dos breves encuentros, uno al comienzo y otro al final de su estadía.

Los siguientes extractos del documento hablan por sí solos:

[...] La embajada en Santiago es una misión diplomática poco común. Un alto nivel de competencia en los aspectos de fondo, con un liderazgo imaginativo, dinámico y exigente, pero estimulador. En una situación política y económica fluida y relativamente compleja, la combinación se traduce en un rendimiento técnico igualado sólo por muy pocas legaciones. El criterio para formulación de políticas adolece de una dicotomía que se origina en la incapacidad de Washington para reaccionar entregando recomendaciones adecuadamente meditadas. Para un observador externo, Estados Unidos está destinando una cantidad relativamente muy alta de recursos y personal a Chile, más que nada debido a las enormes inversiones estadounidenses en esta nación y a que sería perjudicial para los intereses norteamericanos en el área si uno de los pocos países del hemisferio administrados de manera democrática cayera bajo un régimen autoritario. [...]

La misión diplomática está abordando todos estos problemas de una forma dinámica e imaginativa, pero las complicaciones provocadas por opiniones divergentes y, como se señala más abajo, muchas de las interrogantes que se

El error contraproducente que cometí fue intentar ser más listo que todos los funcionarios de Washington: tratar de mantener la confianza de las partes más involucradas en el conflicto, de bandos diametralmente opuestos como lo eran la Casa Blanca y el Departamento de Estado, o un Congreso demócrata y un Presidente republicano. Las falsas esperanzas, las frases lisonjeras y las contradicciones acabaron por delatarme; el jefe de estación de la CIA, Henry Hecksher, descubrió a fines de septiembre que mis actos se contradecían con lo insinuado en mis cables. Como diría el último premio Nobel de Economía, se trató de un caso perfecto de información asimétrica.

Aun así, desde el mes de agosto de 1970 en adelante Washington en ningún momento me permitió escapar fácilmente de las argucias verbales. La Casa Blanca me ordenó enviar el Informe de Contingencia que yo me había ingeniado para retener durante varias semanas. En ese documento, titulado "Fidelismo sin Fidel", se formulaban dos preguntas esenciales:

suscitan, plantean al parecer más dificultades al Departamento de Estado que a la misión. En términos generales, a Estados Unidos le está yendo lo mejor que cabría esperar en Chile, si se tienen en cuenta las presiones y rígidas medidas burocráticas que hostigan las políticas y operaciones norteamericanas en el exterior.

La dirección de los programas refleja sobre todo el estilo personal de un embajador imaginativo, decidido, duro de golpear, intelectualmente ávido e insaciable. Él fomenta el desempeño óptimo de su personal, se mantiene absolutamente al tanto de casi todo lo que ocurre en la misión diplomática, que es muy extensa, y actúa a tono con su imagen y su modo de pensar. Puesto que acoge con agrado las ideas de otros, es impresionantemente persuasivo al momento de defender sus decisiones y marca la pauta en cuanto a cumplir con sus elevados criterios de competencia y laboriosidad, goza del pleno respaldo y de la lealtad de su personal. En las reuniones semanales del "Equipo País", a todos los funcionarios clave o que ocupan altos cargos "se les concede la palabra" para que tengan la oportunidad de plantear inquietudes y expresar sus puntos de vista. En las reuniones de secciones del personal, que se celebran con frecuencia, tienen lugar extensos debates. [...]

Como hemos podido apreciar, la misión diplomática mantiene una gama de contactos lo más amplia posible, pero no se dispersan esfuerzos en este sentido; el método para establecer y aprovechar los contactos también es de alto nivel. [...]

La labor política, encabezada por el embajador, es más exhaustiva, productiva, amplia, intensiva, y analíticamente aguda que las que hemos visto con anterioridad. El nivel de competencia individual es notablemente alto. Si bien cuesta creer que una información tan voluminosa y detallada vaya a resultar fundamental para Washington, sin duda ella es bien recibida por usuarios finales a quienes su dinámico contenido puede parecerles un manjar delicioso en comparación con la ración de papas cocidas que reciben en otros puestos. [...]

¿Qué repercusiones tendría una presidencia de Allende? ¿Qué debería hacer Estados Unidos? A mí me pareció que lo más prudente era demorar tanto como fuera posible lanzar ese hueso tan sabroso a los perros hambrientos de Washington.

Ahora, señor Fontaine, pongo en conocimiento suyo y del CEP la versión sin expurgar del Informe de Contingencia, tal como fue entregado a Washington, junto con los cables explicativos que en ese entonces me exigió enviar mi gobierno. [Véanse cables e Informe de Contingencia en “Chile en los archivos de Estados Unidos”, *supra*. (N. del E.)]

Transcurrido un cuarto de siglo son muy pocos los aspectos de dicho informe que necesitan ser revisados. En los siguientes tres años ni mi embajada ni la Casa Blanca —salvo Nixon durante un breve lapso— modificaron sus conclusiones: que un gobierno de Allende representaría en verdad un “fidelismo sin Fidel”, que un *modus vivendi* era una ilusión, que las medidas hostiles serían contraproducentes y que actuar con corrección era la única alternativa viable. En el documento se señalaba que si bien Allende procuraría inculpar a Estados Unidos, no debíamos dar lugar a provocaciones. Por otros conductos, claro está, envié propuestas en que instaba a Washington a facilitar los medios que permitieran la supervivencia de órganos de prensa, de medios de difusión y de una oposición democráticos, programas que se pusieron en marcha poco después de la elección y continuaron durante el período de la Unidad Popular.

Debido a que los redactores de las conclusiones de la Comisión Church lo ocultaron, las presiones enormes —chantaje, amenazas de daño físico y una extrema opresión económica— ejercidas por Allende para lograr controlar todos los más importantes órganos de prensa y medios de información, que se iniciaron inmediatamente después de que se terció la banda presidencial, no fueron conocidas por la opinión pública, y en gran medida continúan ignoradas hasta hoy. Un caso digno de mención ocurrió a comienzos de 1971, cuando la UP pretendió obligar a los demócratacristianos a votar en el Congreso en favor del programa de Allende. El candidato del PDC, Tomic, y sus simpatizantes habían extendido cheques a fecha para financiar su campaña, práctica ilegal según la ley chilena, pero ampliamente generalizada entre los políticos. Una vez que se nacionalizaron los bancos, el régimen de Allende utilizó estos cheques como un arma intimidatoria para que los demócratacristianos se alinearan con la UP. Los detalles de este caso están muy bien documentados en cables de la embajada, por cuanto un desesperado PDC nos solicitó cancelar las deudas pendientes de Tomic.

Los principales órganos de la prensa occidental también han mantenido a la opinión pública a oscuras respecto de dos casos manifiestos de sobornos pagados por firmas extranjeras a cambio de acuerdos de nacionalización aceptables con Allende. Por ejemplo, una vez que *The New York Times* identificó a Allende como un “socialdemócrata” y una víctima “asesinada” por un Ejército represivo, esos hechos ignominiosos no podían ser ventilados por una comunidad de periodistas democráticos que buscaban afirmar su superioridad moral presentándose como el nuevo clero laico del siglo XX¹⁶.

Por estas mismas razones, además, se ignoró la enorme ofensiva de Allende para compeler a los militares chilenos a aceptar los cientos de millones de dólares en armamento ofrecidos por Moscú. Una y otra vez entre 1972 y 1973 el mandatario chileno, como lo describió mi sucesor con lujo de detalles, presionó al general Carlos Prats y a sus colegas de otras ramas para que acogieran de manera favorable la propuesta del Kremlin de modo de transformar al Ejército en un organismo dependiente de las armas rusas, como en el caso de Cuba. En vez de concentrarse en el paquete de US\$ 300 millones que el Kremlin ofrecía de manera tentadora, los periodistas ahondaron en la ayuda militar estadounidense que, en promedio, había alcanzado a US\$ 2 millones entre los años fiscales 1968 a 1972 y, por supuesto, en las actividades de la CIA.

¹⁶ *The New York Times* efectivamente publicó el 16 de septiembre de 1974 una entrevista que me realizaron acerca de la “línea blanda” que se adoptó con Allende, pero sólo después que, según el entrevistador, Peter Kihss, la aparición del artículo se postergara por varios días para que el diario tuviera tiempo de incluir un editorial sobre mi dudosa integridad y para que Hersh formulara nuevas acusaciones. Así pues, una entrevista en la que desmentía uno de los cargos, concedida a un reportero que se remitió a citas de un anterior artículo de Hersh, me colocó en una situación en que no podía responder a los comentarios del editorial ni a las nuevas imputaciones de Hersh. Además, *The New York Times* desenterró de sus archivos una foto mía, muy rara, en la que aparecía con anteojos oscuros, los que por coincidencia también solía usar el general Pinochet.

Por otra parte, el cuerpo editorial del *Wall Street Journal* le había encomendado a una académica de Yale, Susan Weaver, que leyera toda la documentación disponible, me interrogara a fondo, y luego publicara el 12 de enero de 1977 un editorial titulado “El caso Korry”. En él se señalaba que “era escandaloso que al Sr. Korry se le hubiera negado su derecho a ser escuchado, y que la Comisión Church, al igual que algunos sectores de la prensa, habían hecho mal en decidir juzgarlo según criterios que no aplicaron a sus predecesores [...] y que deberían ponerse al descubierto los intereses partidistas de aquellos que lo difamaron”.

Hasta hoy *The New York Times* y todos quienes siguieron su ejemplo de sostener que cometí perjurio —el *New York Magazine*, el *Washington Post*, las tres principales cadenas de TV— se han negado a enmendar la relación de los hechos, así como a publicar el episodio de la exclusión y la distorsión histórica a que dio lugar, ni siquiera después que Hersh “descubrió nuevas evidencias” en 1981. Por consiguiente, nunca se ha divulgado el claro intento de extorsión por parte de Hersh, un delito, aquí y en cualquier parte, que quedó impune bajo el manto protector de la reputación del *The New York Times* y del comité que otorga el premio Pulitzer.

“Desestabilización” es una palabra que antes de 1974 nadie que yo conociera utilizó jamás en ningún contexto y en ninguna oportunidad, como Schlaudeman y yo declaramos bajo juramento. La primera vez que vimos emplear ese término (y el acto de atropello que simboliza) fue cuando *The New York Times* y el *Washington Post* publicaron la información filtrada a sus reporteros “de investigación” por el asistente del senador Church, Jerry Levinson, quien al citar lo que supuestamente eran instrucciones secretas enviadas por el Director de la CIA, William Colby, a una subcomisión de la Cámara de Representantes, estaba violando las leyes de seguridad nacional¹⁷.

¹⁷ Para que nadie piense que con estos fondos se pretendía “desestabilizar” el país —como consiguiera la Comisión Church convencer a la opinión mundial a través de sus comunicados—, lo cierto es que su objetivo se limitaba a sostener los pilares más honorables y sobrios del centro político chileno: mantener funcionando por lo menos a un diario y a una radioemisora, y respaldar a todos aquellos ciudadanos comprometidos con la democracia entendida según la definición occidental. La democracia, para Allende, representaba un sistema únicamente “formal”, a diferencia de la “verdadera” democracia practicada en Cuba y en la URSS.

Tanto antes como después de las elecciones de 1971 yo no sólo había impedido que se entregaran fondos a grupos tan extremistas como Patria y Libertad, sino que además había prohibido todo contacto de funcionarios norteamericanos con este movimiento y con sectores castrenses (las únicas excepciones fueron los agregados militares que cumplían sus deberes normales). Asimismo, yo había citado a chilenos cuyos hijos participaban activamente en Patria y Libertad, en la época en que fraguaban su conspiración para asesinar a Allende, con el fin de advertirles que si no lograban disuadir a estos muchachos, se comunicaría a las sedes centrales de sus empresas en Estados Unidos que estas acciones estaban poniendo en riesgo bienes y ciudadanos norteamericanos. El Presidente Nixon dejó sin efecto mis prohibiciones mediante órdenes secretas enviadas a la CIA y, también, quizás a los agregados militares; así, tras mi partida esos elementos disuasivos ya no operaron.

Si Washington no hubiera otorgado apoyo para mantener en pie una fuerza opositora, el gobierno de la UP, con su recién adquirido poder total sobre todos los bancos y toda unidad significativa de producción y distribución, podría haber ejercido una presión decisiva sobre los editores, las empresas abastecedoras de papel, los anunciantes y los precios. A decir verdad, eso es precisamente lo que hizo el régimen de Allende en el curso de sus primeros meses, en un apresurado intento por silenciar a una oposición eficaz en la prensa y en la radio.

Lo que destruyó a Allende no fue la CIA ni ninguna fuerza exógena, sino la emisión descontrolada de dinero. Al testificar en una sesión a puerta cerrada del Comité de la Cámara de Representantes, celebrada en la primavera boreal de 1971 y presidida por Dante Fascell, parlamentario latinoamericanista, yo señalé que si bien la Unidad Popular no había transgredido abiertamente los derechos de los chilenos, su gobierno había duplicado el circulante. Lo anterior se traduciría en un proceso inflacionario que originaría una situación cada vez más difícil.

Ninguno de los numerosos congresistas que asistieron estuvo dispuesto a analizar más a fondo lo que en ese entonces era un tema arcano en el Congreso: la oferta de dinero. En todo caso, tal parece que durante esa época los círculos políticos de Washington ignoraban el modo de encarar la inflación. Por regla general, los demócratas no se preocupaban mayormente por el bombo de dinero desde la capital estadounidense hacia el resto del país; Nixon optó por luchar contra este proceso por medio del control de precios, y otro republicano, Gerald Ford, recurrió a botones de solapa con consignas antiinflacionistas para frenar el alza de los

A mediados de octubre, en el curso de la tensa quincena que precedió a la asunción de Allende, expuse en la Oficina Oval directamente al señor Nixon y al doctor Kissinger (con quienes ya había conversado en una oportunidad anterior) todos mis argumentos del Informe de Contingencia. Nixon había iniciado la reunión dándome una calurosa bienvenida y explicándose en una perorata en contra de “ese desgraciado de Allende”. Recalcó que “liquidaría a Allende económicamente”, frase que repitió varias veces al tiempo que golpeaba con un puño la palma de la otra mano para dar mayor énfasis a sus palabras. Cuando concluyó y se volvió hacia mí, le repliqué: “¡Usted está absolutamente equivocado, señor Presidente!” Los ojos de Kissinger se dilataron, no pudiendo dar crédito a lo que percibía como una muestra de insolencia.

Yo continué mi argumentación advirtiendo que si bien no alteraría ni un ápice mi análisis sobre la Unidad Popular y sus objetivos marxista-leninistas, sucesos fortuitos podrían intervenir una vez más para crear una oportunidad de cambio en el futuro. Pese a ser estalinista, Tito se había transformado, por causa de factores inesperados y exógenos, en un comunista independiente, aceptable e incluso útil. El hecho de manifestar hostilidad hacia Allende sin motivo aparente avivaría la opinión pública latinoamericana y mundial en contra de Estados Unidos.

Por añadidura, las Fuerzas Armadas se habían comprometido irremisiblemente a no intervenir en el proceso político, aspecto que yo había

precios. Sólo en 1968 el Comité Nobel reconoció a la ciencia económica como una disciplina académica apropiada y digna de un galardón, tal vez como una manera de anticiparse a las enormes necesidades de formación básica sobre la materia durante los años setenta, cuando la inflación en los Estados Unidos bordeó el 20%.

Allende cayó en la trampa de percibir en la prosperidad superficial de 1971 una confirmación de que su modelo de socialismo efectivamente funcionaba. Fue incapaz de comprender que la súbita afluencia de productos agrícolas al mercado era un reflejo del deterioro y no del éxito de sus políticas; movidos por el temor, los agricultores estaban transformando sus bienes en efectivo, liquidando sus equipos, semillas, ganado vivo y existencias de cosechas. Los trabajadores urbanos y los mineros también tenían sus bolsillos llenos de dinero debido al reajuste de salarios aplicado por Allende. Como consecuencia inevitable, esta oleada de circulante debilitó la productividad y el rendimiento, al tiempo que aceleró la inflación en 1972 hasta que alcanzó niveles incontrolables, proceso que culminó en la hiperinflación de 1973.

Con todo, Allende descubrió que, a diferencia de Castro, él no podía recurrir a decretos dictatoriales para sofocar la creciente disidencia. Tampoco podía emular al líder cubano y obligar a la URSS a apuntalar su régimen. A medida que el sector de extrema izquierda de la UP restringía cada vez más su estrecha maniobrabilidad tanto en Chile como en el exterior, el pronóstico de 1970 acerca de un “fidelismo sin Fidel” se comprobó sin necesidad de recurrir a ningún factor ajeno a Chile. Allende acudió cada vez más a los militares, situando a generales en cargos clave dentro del gabinete en un vano y, en definitiva, contraproducente intento por derrotar al enemigo invisible de la inflación desbocada. Pese a que apeló a tácticas dilatorias e inició conversaciones con el PDC y con Washington, no pudo ofrecer nada de valor a cambio. Había creado el escenario para su autodestrucción.

planteado de manera enfática a Kissinger esa mañana, lo mismo que en reiterados cables. Cualquier intento por cambiar el punto de vista de los militares explotaría en la cara de Estados Unidos, ocasionando un enorme daño a los intereses norteamericanos y al propio Nixon, advertí.

No quedaba otra alternativa que dar a conocer nuestra disposición a negociar con Allende, de modo de evitar que tuviera éxito su plan de manipular a la Casa Blanca, hasta inculparla, y justificar así sus medidas antinorteamericanas. En consecuencia, le sugerí a Nixon que enviara un mensaje de felicitaciones a Allende, que despachara una delegación normal a la ceremonia de investidura y que me permitiera iniciar conversaciones con el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores una vez que la Unidad Popular asumiera el poder.

El Presidente no respondió. Luego de mirarme durante un rato se puso de pie y me condujo amablemente hasta una mesa para entregarme recuerdos personales para mi esposa e hijos. En ningún momento dio a entender que planeaba algún tipo de intervención política en Chile, aun cuando él, al igual que Kissinger, estaba enterado de que mi nombre encabezaba la lista de personas a asesinar elaborada por la extrema izquierda (que pronto ejecutaría a quien ocupaba el segundo lugar, Edmundo Pérez Zujovic, otrora Ministro del Interior de Frei).

Informé sobre la conversación directamente al Subsecretario, U. Alexis Johnson, y al Secretario Adjunto, Meyer, añadiendo que creía haber “logrado que el Presidente cambiara de parecer”. Los tres dedicamos los siguientes dos días a preparar borradores del mensaje que se enviaría al Presidente Allende; tras ser rechazados por Nixon, el tono de cada uno de ellos se suavizó hasta que finalmente a Meyer, cuando llegó a Santiago, sólo se le permitió decirle a Allende que el Presidente Nixon, en nombre de los Estados Unidos, felicitaba al pueblo chileno por ejercer sus derechos democráticos. Aun así parecía que Nixon había accedido, a su manera, a las dos primeras sugerencias que le formulé en nuestra reunión personal, y después que Clodomiro Almeyda fuera designado Ministro de Relaciones Exteriores yo apliqué mi propuesta, por cuenta propia, lo cual motivó una inmediata llamada telefónica del Departamento de Estado, a insistencia de Kissinger, para que diera explicaciones.

No obstante, señales de alarma mentales me habían advertido durante semanas que algo se fraguaba a mis espaldas. La Casa Blanca había hecho preguntas sobre el Ejército y Carabineros, y respecto al rol de Estados Unidos. Yo no sólo evité contestar esas preguntas sino también una que me formularon directamente algunos generales chilenos. “Sigán a su líder constitucional”, fue mi respuesta. Yo también había logrado esquivar el

cuerpo y rehuir la alternativa de ejercer presiones sobre Frei, quien había enviado a Nixon un provocativo mensaje antes de mi visita a Washington, según el cual había una probabilidad de 50 a 1 de que una presidencia de Allende condujera a la instauración de un sistema al estilo cubano en Chile, pero en respuesta a mi aguijonada, Frei le había manifestado oficialmente a Nixon que él NO deseaba que Estados Unidos interviniera de otro modo que no fuera colaborando con labores de propaganda.

Cuando nuestro jefe de estación de la CIA descubrió que yo no le había torcido el brazo al Presidente Frei, descargó su ira en mí delante de Schlaudemann, y así sonó otra campanada de alerta. A decir verdad, el hecho de que no me pusiera sobre aviso respecto de ciertos problemas me pareció como si un perro guardián no ladrara. De manera que adopté precauciones extremas para impedir que funcionarios norteamericanos que ocupaban cargos privados u oficiales fueran tentados a involucrarse; en particular, proporcioné información al gobierno saliente sobre el mayor Marshall y Patria y Libertad. Cualquier “aventura” destinada a obstaculizar el acceso de Allende a La Moneda hubiera desencadenado —como ocurrió con su suicidio tres años más tarde— una campaña masiva a nivel mundial manipulada por Moscú para culpar a Estados Unidos, a la CIA y al “imperialismo”. En tales circunstancias, los ciudadanos norteamericanos en Chile correrían peligro.

Afirmar, como lo hicieron algunos —entre ellos el sofista senador Church—, que se me mantuvo en ayunas con respecto a las órdenes de intervención que dio Nixon a la CIA es literalmente cierto, pero nadie puede sostener que yo no tenía clara conciencia de lo que ocurría. De hecho, me apresuré a enviar cables directos a Kissinger y a Nixon advirtiéndoles que cualquier intento por impedir la asunción de Allende tendría un efecto *boomerang* y desembocaría “en otra Bahía Cochinos”¹⁸.

¹⁸ Nixon también se vio enredado en la maraña de verdades a medias que entramparon a “Chile”. En 1966 a él le había causado una enorme impresión mi informe sobre África, que había leído con cuidado, subrayando con tinta roja tantas páginas que su hosco asesor itinerante, Patrick Buchanan, fue sorprendido tratando de mecanografiar a escondidas todas las setenta páginas de anotaciones esenciales en lugar de resumirlas, porque según él “no comprendía este tipo de cosas”.

“No parece escrito por un hombre de Kennedy”, me dijo Nixon durante una reunión que me solicitó antes de partir, tras finalizar su estadía en Etiopía.

“A mi entender un hombre de Kennedy es alguien que dice lo que piensa”, fue mi áspera respuesta.

Tras una pausa de silencio, el futuro presidente inquirió: “¿Estaría usted dispuesto a desempeñar un cargo en el partido de la minoría si alguna vez llegara a la presidencia?” (Véase mi respuesta en la nota 6, segundo párrafo.)

Pero Nixon también había expresado su admiración la noche anterior cuando el Primer Ministro etíope y sus cuatro ministros principales expusieron sus argumentos con extraordinaria franqueza.

“Ellos han dicho maravillas de usted”, me reveló una vez que los invitados se hubieron retirado. “Deben confiar en usted. Según mi experiencia acumulada en visitas a mu-

Pensar, como más de alguien lo ha hecho, que Washington me castigó con una suerte de excomunión debido a mis opiniones sobre Allende y Chile, es igualmente erróneo. El crimen imperdonable que cometí fue no tomar partido por ninguno de los bandos políticos en Washington, hacer caso omiso de la primera advertencia del equipo del senador Church en 1973: “Ayúdenos a liquidar a Kissinger y Nixon o lo liquidaremos a usted”. Como alguien absolutamente convencido desde comienzos de 1971 hasta mediados de 1974 de que había frustrado cualquier aventura, como alguien que en 1971 había escuchado testimonios muy convincentes de que en realidad yo había salvado a Estados Unidos y a Nixon de un desastre, ¿por qué iría a actuar en contra de aquellos que habían hecho caso de mis advertencias y apreciaciones?¹⁹

chos países, ellos no nos dicen las cosas en la cara sino que nos clavan el cuchillo por la espalda”.

Años más tarde, luego de que el Departamento de Estado me comunicó que había “perdido mi credibilidad” con el Presidente por contradecirlo en la Oficina Oval, y por oponerme a que se ejerciera sobre Allende una hostilidad opresiva, acudieron a mi mente los comentarios de Nixon en Addis Abeba. Ellos prueban que la honradez se valora más como principio objetivo que como una experiencia personal, lo que en estricta justicia yo aplicaría a casi todos los que, según *The Economist*, forman la “clase parlanchina”: políticos, periodistas, académicos y abogados. Tal vez se trata de una característica propia de la condición humana, confirmada por una excepción sumamente rara.

¹⁹ A comienzos de 1971, CL (Cy) Sulzberger, un importante corresponsal extranjero y columnista del *The New York Times*, llegó a Santiago inmediatamente después de realizar una entrevista al Presidente Nixon, que había aparecido en primera página. Como nos unían lazos de amistad, él almorzó con nosotros en nuestra residencia. Mientras tomábamos el café, para mi asombro y el de mi esposa, preguntó si podía hablar conmigo a solas. Cuando lo conduje al estudio quiso saber si era un lugar “seguro”. De modo que encendí la radio, aumenté el volumen, y luego me senté a su lado en el sofá.

Sulzberger me susurró al oído que “fuentes irrecusables” —término con el cual se refería al Presidente o a Kissinger— le habían informado de que yo había disuadido a Estados Unidos de intervenir junto con el Ejército chileno en octubre de 1970 para frustrar el acceso de Allende al poder. Yo negué terminantemente que se hubiera contemplado una medida de ese tipo. La experiencia de dos décadas como periodista escuchando a diplomáticos que solían permitirse filtrar información o criticar al presidente de su país me habían inculcado como norma —para mí inquebrantable— evitar ese comportamiento.

Cy me miró con escepticismo y me volvió a formular la pregunta de diversas maneras, pero no logró nada. Años después en París, donde nos encontramos con Sulzberger como dos ciudadanos comunes, fui yo quien le exigí que identificara a su “fuente irrecusable”, término que en mis tiempos de reportero novato se me enseñó a evitar a menos que también creyera en el Ratoncito Pérez. Tras un prolongado silencio y luego de examinar en privado los archivos de su estudio, me recomendó dirigirme a Averell Harriman, demócrata de toda la vida, quien despreciaba a Nixon y a Kissinger.

Mi próximo paso fue viajar a la finca de Harriman en el condado de Westchester, Nueva York, para plantearle la pregunta. Manifestando verdadera sorpresa, no se podía explicar por qué Cy trataba deliberadamente de ocultar sus huellas. Pero como alguien que conocía a Sulzberger y a Harriman por años, recordé que Cy, al igual que Hersh y otros periodistas del *The New York Times* con los que me topé durante la indagación posterior al episodio de Santiago en busca de verdades publicables, solían echar mano de los típicos argumentos en

que se amparan los políticos —“voy a negarlo todo si repites lo que he dicho”, “off the record”, y “no debes atribuirme esta declaración”—, una práctica que en mis veinte años de periodismo nunca había visto ni utilizado. Sin embargo, de manera inconsciente esta actitud revelaba por qué en el curso de ese extraño período los editores y los reporteros se veían cada vez más a sí mismos como otro elemento en el proceso de formulación de políticas, en desmedro de su función tradicional de comunicar los sucesos en forma periodística, transformación de la que Hersh se aprovechó al máximo en el caso de “Chile”.

Años después que abandoné Chile, el ex Presidente Frei declaró a Sulzberger en una entrevista publicada en *The New York Times* que, en particular, yo nunca había ejercido ninguna presión, lo cual contradecía lo señalado implícitamente en las conclusiones de la Comisión Church, amplificadas después por los medios de comunicación de todo el mundo. Es más, el Presidente Allende tuvo el gesto poco común de escribir tras mi partida una carta al Presidente Nixon en la que encomiaba mi labor durante el primer año de gobierno de la UP. En el transcurso de una cena de despedida que me ofreció en octubre de 1971 su Ministro de Relaciones Exteriores, Clodomiro Almeyda, con quien en mi actual visita a Chile he tenido la ocasión de renovar los cordiales vínculos profesionales que entablamos en ese período, pronunció un brindis en mi honor utilizando términos sumamente elogiosos, ante el asombro de los invitados. Nadie mejor que él captó y comprobó lo que yo estaba intentando lograr y lo que la Comisión Church ni siquiera permitió que se le diera a conocer antes de crear el mito de Chile.

Tomic, Valdés y muchos otros demócratacristianos, lo mismo que sus defensores más resueltos en Washington, se sentían muy seguros de que Allende los necesitaría para gobernar. Valdés había sido inducido en ese cálculo erróneo por Volodia Teitelboim en 1969. Éste le había dicho a Valdés que el PC miraría con buenos ojos una candidatura suya a la presidencia. Durante nuestro primer encuentro en 1967, Tomic me había asegurado en Washington que él era “el único hombre” capaz de reconciliar a los Estados Unidos con la Unión Soviética, el único que podría compatibilizar las tres principales corrientes de opinión en el mundo: el socialismo, el capitalismo y la posición intermedia. El hecho de que él tuviera esa opinión de sí mismo bastó para impulsar al Presidente Frei a describirlo a mediados de 1970 como un “desorientado”, juicio que ya se había formado nuestra embajada, pero desgraciadamente no la Oficina para Latinoamérica del Departamento de Estado, la que durante los años en que Tomic permaneció en Washington racionalizó las pretensiones de éste.

No obstante, en la Democracia Cristiana italiana también existía una corriente poderosa que presionaba a los líderes de su colectividad para que respondieran a los tanteos del Partido Comunista italiano, similares a los realizados por su homólogo en Chile. Tanto Valdés como Tomic ya tenían esbozado en su mente confusa un “compromiso histórico” y calculaban que la hegemonía la ejercería el PDC y no los aliados comunistas en Moscú con su consigna de “dividir para reinar”. Con la muerte de Allende, en Italia se intensificó la búsqueda de un “compromiso”, esfuerzo que tuvo un horroroso epílogo en el asesinato del ex Primer Ministro Aldo Moro perpetrado por grupos de extrema izquierda.

El jefe de la campaña de Allende también mostró sus cartas. Él me sugirió con todo desparpajo que un millón de dólares sería una inversión que valdría la pena. Y una vez que la UP asumió el poder, un miembro del gabinete reconoció estar dispuesto a aceptar de la embajada una contribución bajo cuerda.

De hecho, por lo menos dos empresas consiguieron que Allende las favoreciera con sus decisiones a cambio de sobornos muy cuantiosos, uno de US\$ 800.000 pagado por un empresario belga como una forma de retribuir una compensación de US\$ 8 millones sobre las propiedades salitreras de la familia Guggenheim; la otra maniobra la realizó una empresa minera norteamericana —cuyo presidente me negó a gritos que se hubiera recurrido a esa táctica, pero que un director, al igual que otros chilenos, confirmaron mucho después de mi partida con fuentes del Gobierno y de la ITT—, en la cual se utilizó a un político radical ampliamente conocido para negociar una transacción bajo cuerdas con Allende, lo cual contra-venía el acuerdo sobre seguros firmado con la OPIC.

También hubo empresarios chilenos que pagaron por recibir un trato preferente; algunos prestaron un apoyo muy publicitado al mandatario y otros apelaron a medios más convencionales.

Agravé aun más mi error al aclararle en privado al equipo del senador Church que yo consideraba a los Kennedy responsables de una intervención verdaderamente masiva en Chile, y que el derrocamiento de Allende en 1973 no había alterado en lo más mínimo las opiniones expresadas en el Informe de Contingencia. Si los republicanos creían que yo iba a hablar del aventurerismo político de Nixon, del sector empresarial o de la CIA, entonces los demócratas preveían revelaciones en torno a las actividades de la administración de John F. Kennedy y sus aliados en la Iglesia, en el ámbito laboral, en el mundo empresarial, en círculos académicos y en el extranjero. Ninguno de los dos partidos deseaba que el registro de los hechos fuera más allá de los acuerdos tácitos a que habían llegado ambas colectividades durante la investigación, y éstas con la CIA. No querían que las audiencias [de la Comisión Church] escaparan de su control, pues ello beneficiaría a una izquierda, hasta ahora contenida, y provocaría un grave daño electoral que los afectaría a ellos y a su imagen pública. Yo repliqué por escrito que las verdades a medias, las mentiras flagrantes y los mitos que ellos habían hecho circular por todo el mundo a través de las conclusiones de los miembros de su Comisión habían causado un grave perjuicio a Chile y ocasionarían pérdidas de vidas en dicho país, además de acelerar el deterioro en el aprecio de la opinión pública por la clase dirigente y los medios de difusión estadounidenses, predicción que desgraciadamente se hizo realidad.

La investigación del Senado en torno a una década de operaciones encubiertas en Chile vino sólo después de nuestra derrota en Vietnam y del escándalo de Watergate. La contingencia quiso que “Chile” se insertara en el contexto de un país ya aturcido ante la súbita profusión de mitos auto-complacientes sobre la invencibilidad, los conocimientos técnicos y la distinción entre medios y fines. La idea era que el veredicto de la Comisión Church se transformara en una especie de tarro basurero en el que se pudiera arrojar gran parte de nuestro pasado y algunos de nuestros malos hábitos, junto con el desacreditado señor Nixon, en primer lugar, además del difunto Lyndon Johnson, ambos humillados por los sucesos de Vietnam. Puesto que responsabilizarse de sus fracasos y responder de sus actos no es una costumbre generalizada entre los políticos en épocas de desgracia nacional, la CIA, un organismo creado específicamente para servirles de parapeto, fue escogida como el chivo expiatorio.

El Chile de los titulares resultó ser un expediente conveniente, aunque inesperado y escurridizo, para restablecer la moralidad y la credibilidad de los Estados Unidos. También permitió que los principales actores —se tratara de Kissinger, los senadores Church, Mondale, Ted Kennedy y Baker, todos aspirantes presidenciales y miembros de la comisión investigadora, o del director de la CIA, William Colby— al menos pudiesen

mantener sus cargos, si es que no escalar, conjuntamente con los casi anónimos integrantes del equipo que realizaron “el trabajo pesado” entre bastidores para llegar a los tácitos acuerdos bipartidistas. Los demócratas, tanto el partido mayoritario como los “acusadores” en el caso de Chile, mantuvieron a los republicanos muy a la defensiva a lo largo de todo el proceso, ya que disponían de pruebas que habrían puesto en aprietos a importantes aliados empresariales del señor Nixon²⁰.

²⁰ Las repercusiones de la decisión adoptada por Kennedy en 1963 de involucrar a las multinacionales en su plan maestro para Chile se hicieron sentir por muchos años. Cuando el mandatario falleció, cada uno de los peces gordos escogió su propio camino para desarrollar sus negocios en Latinoamérica y en Chile.

Por ejemplo, el difunto Peter Grace —personaje ligero de genio, otrora cabeza de la enorme transnacional WR Grace and Co., y el católico laico más poderoso de Estados Unidos en los años sesenta— había usado su dinero y su enorme influencia en coordinación con la CIA para apoyar lo que su Iglesia y su Presidente habían considerado un asunto fundamental. Sin embargo, en 1968 descubrí que el nuevo representante regional de su empresa, el abogado Peter Jones, estaba poniendo fin sigilosamente a todas las inversiones de Grace en Chile. Demócrata bien relacionado y partidario de Kennedy, el ambicioso Jones intentó sacar partido de la estrecha amistad entre nuestras esposas al presentarse a influyentes figuras chilenas como un muy bien informado miembro de los círculos de poder estadounidenses, maniobra que neutralicé en breve con discretas medidas preventivas.

No obstante, la decisión de Grace, conservador en todos los aspectos, de retirarse de Chile (y al parecer también de Perú) constituía una tácita muestra de criterio comercial realista; según trascendió a otros sectores, este repliegue presagiaba un futuro sombrío para las aspiraciones del PDC y de Chile en lo relativo a un acelerado proceso de industrialización. Peter Grace resolvió dar este paso a mediados de 1967, la misma época en que Dungan también optó por abandonar el barco aduciendo como aparente excusa su incapacidad para seguir siendo embajador en Santiago porque, según me señaló, se oponía a la política de Lyndon Johnson en Vietnam.

Jones, quien se había graduado en la escuela de derecho de Yale, reapareció en 1970 como el nuevo representante de la ITT en Argentina. Él me telefoneó desde Buenos Aires tras la victoria de Allende, y luego me escribió para preguntarme si podría venir a Santiago a “prestar ayuda”. Aunque yo rechacé la idea de plano, y les pedí a dos representantes de la ITT, Barellez y Hendrix, que le recomendaran a Jones mantenerse aparte, Jones de todo modos envió a Chile a un agente político no deseado, que había participado en la CIA entre 1963 y 1964. Su misión en esta oportunidad era la de movilizar una vez más a los empresarios chilenos para impedir que Allende alcanzara el poder. Jones, un sobreviviente profesional, se las ingenió en el curso de sus muchas vidas corporativas para conservar el apoyo de poderosos intermediarios en los círculos de poder en Washington y Nueva York.

Un ejemplo no menos curioso en el lado republicano fue el que encarnó el dinámico y también ambicioso Don Kendall, quien como presidente de Pepsico ejerció gran influencia política apoyando candidaturas. En los años sesenta, él había contratado a Richard Nixon como su abogado, por lo menos de nombre. Según me enteré no mucho después, Pepsico había financiado los viajes de Nixon a ocho países de África, lo mismo que su anterior gira por Latinoamérica, incluido Chile, un hecho desconocido por mí hasta fines de 1970. Kendall había visitado Chile por lo menos un par de veces durante los dos años anteriores. Pepsico tenía un *joint venture* en Chile. Más tarde él hizo arreglos para que el propietario de *El Mercurio*, Agustín Edwards, fuera recibido en la Oficina Oval el 15 de septiembre de 1970.

Educado en Princeton, al igual, casualmente, que la mayoría de los miembros clave del Senado que investigaron este caso cinco años después, Edwards había mantenido un vínculo muy cercano con Dungan, a quien solía visitar de improviso para sostener charlas no programadas. En lo que a él respecta, una vez más yo enfrié las relaciones. Mis contactos con Edwards fueron escasos; almorcé dos veces con él y sus editores en *El Mercurio*, cenamos dos

veces con ocasión de veladas oficiales; él asistió dos veces a reuniones sociales de la embajada.

Sin embargo, justo antes de las elecciones de 1970, él apareció sin aviso previo en la embajada, donde se reunió por cinco minutos conmigo para conocer mi pronóstico respecto del vencedor en la elección. Y, poco después del triunfo de Allende, me solicitó por conducto de un intermediario que nos reuniéramos en privado en el hogar de uno de los gerentes de sus numerosas empresas. En un momento de ese breve encuentro, me preguntó: “¿Harían algo las Fuerzas Armadas chilenas para revertir este desenlace?” “No existe ninguna probabilidad”, le contesté. Se despidió de mí anunciando que se iba de Chile inmediatamente, y regresé a mi residencia conduciendo yo mismo.

Una vez radicado en Estados Unidos, y tras su fatídica entrevista con Nixon, él pasó a ocupar un cargo ejecutivo en Pepsico.

En 1973 y 1974, en mi calidad de entonces presidente de la Asociación de las Naciones Unidas, tuve la oportunidad de participar junto a Kendall, quien había efectuado una arriesgada inversión en Rusia, y con el economista socialista John Kenneth Galbraith, en el comité ejecutivo de cinco miembros que procuraba crear un clima de distensión más eficaz con la URSS. Cuando me presentaron a Kendall por primera vez, me saludó con una sonrisa y exclamó: “Ah, el hombre que perdió Chile”.

Kendall creía que él y Nixon eran responsables de la decisión soviética de no acudir en auxilio de Allende, una justificación débil y risible que beneficiaba a ambos ya que no tenía en cuenta los enormes paquetes de pertrechos militares ofrecidos por el Kremlin, ni otras medidas destinadas a otorgar a la UP el control sobre las Fuerzas Armadas, ni el costo espantosamente alto que supondría el hecho de mantener a flote a un país como el Chile de ese entonces, sumido en la hiperinflación. En 1975, cuando el clima de irritación en torno a “Chile” alcanzó su máxima intensidad, renuncié al comité, y en una cena privada le señalé a su secretario ejecutivo que mi intención era tratar de sacar a la luz toda la verdad y, por lo tanto, Kendall podría ser blanco de acusaciones. De modo que por una cuestión de honor yo estaba obligado a dejar de participar en una iniciativa que Kendall ayudaba a costear. De igual modo, le explique a Galbraith en Harvard mis motivos para abandonar el equipo, ya que él también era uno de los principales contribuyentes financieros y además estrecho amigo de mi patrocinador, George Ball.

En las audiencias privadas celebradas en Washington, de conformidad con las normas consignadas en el contrato de seguros suscrito por la Anaconda con la OPIC, Anaconda obtuvo una sentencia favorable. Ambas partes convinieron en designar a un solo árbitro, el ex juez del estado de Nueva York, Stanley Fuld.

El equipo jurídico de Anaconda estaba formado por tres demócratas de línea dura de Washington: Lloyd Cutler —poco después asesor legal del Presidente—, además de Gerald Smith y Paul Warnke, ambos embajadores del más alto rango en su calidad de principales negociadores en las conversaciones con los soviéticos para el control de armas. Su testigo clave era el embajador Dungan, quien había puesto en marcha el programa de inversión en el cobre tras la elección de Frei en Chile.

El gobierno estadounidense era representado por un joven e inexperto abogado de una firma especializada en asuntos de defensa. Yo era su testigo clave.

Al final de mi testimonio, el árbitro Fuld me preguntó si podía esperarlo afuera hasta el receso. Cuando salió de la sala me condujo hasta su oficina y me dijo que había leído todos mis cables relativos al cobre y deseaba que yo supiera “lo orgulloso que lo hicieron sentirse de ser estadounidenses”.

A decir verdad, al expresarme por cable sus efusivas felicitaciones por la función que me cupo en las negociaciones de 1969, el Subsecretario de Estado, Eliot Richardson, señaló: “Sus cables relativos al problema del cobre serán considerados por décadas como un texto modelo para todos los aspirantes a diplomáticos”.

En Nueva York, algunos meses después de que Anaconda ganó su demanda por seguros, a pesar de no haber pagado la prima en 1970 —el punto en debate del arbitraje—, Robert Rossa, ex Subsecretario del Tesoro de Kennedy y presidente de Brown Brothers, al igual que Harriman y uno de los directores de Anaconda, me dijeron durante una cena a la que yo había sido invitado: “Su testimonio fue impecable”. Herb Salzman, funcionario de la OPIC, y futuro embajador, empleó casi las mismas palabras para reflejar la opinión de ambas partes en el litigio.

El presidente Gerald Ford cumplió un papel no despreciable en el esfuerzo llevado a cabo por el centro de nuestro espectro político para recuperar el control hasta entonces en manos de la izquierda. La influencia combinada del inexpugnable “sector del medio” y su poderoso ascendiente en, por ejemplo, *The New York Times*, en el *Washington Post* y en las cadenas de televisión, convirtieron mis esfuerzos por sacar a la luz toda la verdad en una empresa cada vez más quijotesca y ridícula, cuya complejidad sólo contribuyó a aumentar su vulnerabilidad. Aunque nunca fue un motivo central de crítica, mi desagrado frente a la manera en que la Comisión —la casi totalidad de cuyos miembros había votado en favor de otorgar una enorme cantidad de fondos para derrotar a Allende en 1964— estaba transformando su relación de los hechos, y la nuestra, me impulsó a expresar mis objeciones de manera persistente y sonora. Guiándose por lo que estimaban aconsejable, los actores principales decidieron, por razones de Estado y conveniencia personal, que la ficción invalidaba los hechos.

“El peso de la noche” se había dejado caer con toda su fuerza sobre Chile, sobre mí, sobre Estados Unidos. Roosevelt, Yugoslavia, China, Italia, Hong Kong y muchas otras circunstancias del pasado determinaron los sucesos a los que me he referido esta tarde. A decir verdad, las repercusiones de “los Estados Unidos en Chile” siguen influyendo en el pueblo norteamericano de diversas y significativas maneras, en particular en sus opiniones sobre nuestro gobierno, sobre los periodistas más influyentes y sobre la política exterior.

En los ámbitos económico y político, el pasado nunca muere del todo como ocurre con sus artífices. Lo que una vez sucedió, tiende a repetirse. Por ejemplo, en la actualidad se ha revivido la “trampa de la liquidez” para explicar el caso de Japón; China, la economía más grande del mundo antes de 1850, está a punto de recuperar esa posición, también en términos militares; Leningrado ha vuelto a ser San Petersburgo, Rusia y China han adoptado formas de capitalismo, y así pueden citarse muchas otras situaciones similares.

Con un historial que refleja una propensión a escoger ganadores y perdedores antes de que lo haga el mercado, aprovecho esta oportunidad para anotar que aún están lejos de resolverse las ingratas incompatibilidades entre el capitalismo, por un lado, y la democracia basada en el sufragio universal, por el otro, tanto al interior de Asia, Europa, África, Latinoamérica, o en el centro de mi interés principal, Estados Unidos. Tras una aparente prosperidad yacen problemas sociales que en cierto modo me recuerdan a la Europa que recorrí en bicicleta en los años treinta. También resultan evocadoras algunas de las llagas supurantes de la política exterior

que afectan a una nación estadounidense que, al parecer, desea un mayor grado de comercio internacional y un menor grado de compromiso internacional. Así como Roosevelt afrontó un problema de este tipo durante su segundo mandato, y los Kennedy vivieron una experiencia póstuma, paralela, con Chile y Vietnam, también un futuro líder en Washington o en otro país puede verse sobrepasado por sucesos pretéritos que se niegan a permanecer sepultados.

En Chile se verificaron algunas de las imprevistas consecuencias implícitas en las duras opiniones emitidas por mi colega británico en 1970. Sin un respeto informado por un pasado que él estimaba saludable para Chile, sería temerario creer que el retorno a hábitos antiguos —fenómeno que se puede ver en mi propio país— es inconcebible en otras naciones. Hasta en las economías más dinámicas se considera que una actitud de inercia y complacencia puede traer consigo sorpresas no deseadas. Agregar valor a una sociedad es un desafío no menos difícil que añadir valor a una industria o un producto.

Como visitante en este país, como alguien que en la última etapa de su vida ha tenido el privilegio de ver una nación revitalizada y dinámica, el primer “tigre” de Latinoamérica, y como alguien que viaja constantemente, quisiera decir que ningún pueblo, ningún otro Estado en esta etapa de la historia inspira un mayor grado de confianza u ostenta una disposición más resuelta a afrontar o superar los desafíos del futuro.

APÉNDICE N° 1

SOBRE LA AYUDA MILITAR SOVIÉTICA, 1971-1973

La siguiente es una cronología de acontecimientos significativos respecto de la ayuda militar prestada a Chile por el gobierno soviético, todos los cuales se basan en el registro oficial de comunicaciones sostenidas entre Washington y la embajada estadounidense en Santiago:

i) Agosto de 1971: Durante su visita a Moscú el general Pickering recibe una oferta de US\$ 50 millones en créditos militares para el Ejército chileno. Según el general Prats, entonces Comandante en Jefe del Ejército, al regreso de Pickering, Allende recomienda encarecidamente aceptar la proposición. Por su parte, Prats, quien apoya al Jefe de Estado, se opone terminantemente a esta propuesta fundándose en razones institucionales e internacionales planteadas por la mayoría de sus colegas.

ii) Junio de 1972: El general Prats le informa al embajador Davis que le está resultando muy difícil rechazar las presiones soviéticas para que Chile acepte créditos militares, ya que el total destinado a las tres ramas ascendería a alrededor de US\$ 300 millones, en condiciones muy generosas. Solicita mayor ayuda militar de parte de Estados Unidos.

iii) Julio de 1972: Estados Unidos autoriza a una embajada en otra capital latinoamericana para que le revele al Jefe de Estado de esa nación, en respuesta a preguntas e inquietudes manifestadas por éste, que Moscú había formulado una tentadora oferta a las Fuerzas Armadas chilenas consistente en alrededor de US\$ 300 a US\$ 500 millones en equipamiento militar.

iv) Julio de 1972: La embajada de Estados Unidos en Santiago responde a preguntas que circulan en el resto de Latinoamérica, comunicándole a otra embajada norteamericana que el general Prats, en efecto, había corroborado la excelente impresión que se había formado la misión chilena compuesta por 24 miembros de las tres ramas que en enero de ese año habían realizado una gira por las instalaciones militares cubanas. Allende había patrocinado el viaje tras sostener contactos directos con Castro.

v) Marzo a octubre de 1972: El anuncio formulado por Allende en enero de 1971, en cuanto a que los soviéticos concederían créditos para modernización de los puertos, se pone en práctica en una serie de etapas sucesivas —proceso análogo al que antecedió a importantes alianzas militares en lugares como Somalia al promediar la década de los sesenta. Ambas naciones revelan que se construirá un nuevo puerto pesquero en el Golfo de Arauco, y acuerdan que buques de la “Soviet Maritime Corp.” —las primeras naves soviéticas a las que se les permitía hacer escala en Sudamérica (como antes había ocurrido con los aviones de Aeroflot)— recalarán regularmente en puertos chilenos, que se incorporará un buque soviético de investigación científica en el programa antártico de la Armada chilena, que dos “buques de investigación” navegarán por aguas chilenas, que expertos chilenos en las áreas pesquera y naval recibirán capacitación en la URSS, y que tres buques para pesca de arrastre serán estacionados a cierta distancia de la costa. En su mayor parte estos acuerdos son resultado de la visita del Jefe de Operaciones Navales, almirante Montero, a Moscú, donde fue recibido por el Ministro de Defensa soviético, mariscal Grechko, quien estuvo a cargo de la rápida expansión de la Armada de ese país hasta convertirla en una fuerza mundial de enormes proporciones y de gran poder estratégico.

vi) 31 de marzo de 1973: El general Prats, en conocimiento de que los rusos le habían dicho con crudeza a Allende —durante su visita a Moscú para conseguir US\$ 500 millones en ayuda económica en diciembre de 1972— que en lugar de pedir dinero hiciera las paces con los Estados Unidos, suplica al embajador Davis que le concierte una entrevista con su colega norteamericano, el general Abrams. Prats señala que como visitaría Moscú en mayo a instancias de Allende, primero debería reunirse con Abrams. Sostiene que los soviéticos están dispuestos a facilitar a los chilenos “lo que necesitemos, incluido armamento de último modelo”. Prats reconoce que ya no puede declinar la oferta y, obligado a aceptarla, no escogería las armas más complejas, por diversas razones.

vii) 9 de mayo de 1973: La embajada presenta su *Evaluación estratégica* anual de Chile. Entre otras cosas advierte que “Presiones ejercidas por el gobierno (de Allende) pueden llevar a las Fuerzas Armadas a aceptar material bélico soviético, probablemente acompañado de la correspondiente asistencia y capacitación técnica”.

viii) 9 de mayo de 1973: Prats se reúne con el general Abrams y argumenta en favor de que Estados Unidos aumente sus ventas de pertrechos militares a Chile.

ix) 11 al 15 de mayo de 1973: Prats es recibido por Kosyguin y luego por el mariscal Grechko. Un día después de su partida, el 16 de mayo, el diario *Pravda* aconseja a Prats que desoiga los cantos de sirena de la oposición política chilena.

x) 7 de junio de 1973: El general Prats advierte al embajador Davis de que poderosos sectores de la Unidad Popular se oponen a la moderación y que él pretende planificar junto con Allende una “tregua política” en Chile para que el país se ponga a producir.

xi) 29 de junio de 1973: La embajada en Santiago informa, en un cable muy detallado, que el viraje del Partido Comunista hacia una línea más dura es “deliberado, abrupto y real”. Altos personeros de la Democracia Cristiana liderados por el ex presidente Eduardo Frei habían concluido anteriormente (al igual que observadores en el exterior familiarizados con las tácticas comunistas cuando “la correlación de fuerzas objetivas” era semejante a la de Chile en 1973) que el Partido Comunista chileno llegaría a convencerse de que no tiene otra alternativa que provocar un golpe militar.

xii) 24 de julio de 1973: Allende realiza un esfuerzo desesperado para que la URSS cambie su tozuda opinión de no sacarlo de apuros y de que debe acercarse al PDC. El gobierno chileno da a conocer el intercambio epistolar entre Allende y Chou En-lai, en el cual este último, el 3 de febrero de 1973, había rehusado en términos diplomáticos acudir en ayuda de la UP. (La divulgación de las cartas también podría interpretarse como un intento destinado a convencer a la extrema izquierda de que si no moderaba su postura intransigente en contra de una solución de compromiso con Estados Unidos en el frente externo, y con el PDC en el frente interno, la situación se tornaría desesperada.)

Comentarios

a) El registro de comunicaciones demuestra a todas luces que Allende (con los cubanos en Santiago y Castro detrás de él) trató personalmente de convertir a las Fuerzas Armadas chilenas en una organización que dependiera de Moscú.

b) También ilustra la manera en que el general Prats intentó frenar esa prisa por abalanzarse a recibir el abrazo del oso del Kremlin, logrando que Estados Unidos aumentara el monto de su ayuda militar. Sin embargo, en ningún momento mencionó que Chile no aceptaría una cantidad importante de armamento ruso. Es posible concluir que, al procurarse una pequeña cantidad de equipamiento bélico estadounidense, él intentaba legitimar la idea generalizada en círculos occidentales de que Allende era “neutral”. Al respecto resulta interesante señalar que un agente soviético clave informó a los norteamericanos, en marzo de 1973, que Moscú no había acogido la petición de Allende (algo de lo que Washington estaba al tanto desde hacía meses); él intentó retratar a Allende como una persona “neutral”. El agente de la KGB instó a un influyente funcionario estadounidense a ver a Allende como alguien que trataba de “reprimir los elementos anarquistas y extremistas de su coalición”. Según él, Moscú le había aconsejado al Presidente chileno que negociara en términos realistas con Estados Unidos, y que, en el frente interno, evitara que sectores de la “pequeña burguesía” se distanciaran aún más del Gobierno. En marzo, a su vez, Allende inició conversaciones con el PDC y envió a uno de sus asesores para que se reuniera conmigo y me preguntara si mi fórmula podía modificarse de algún modo para que se pudieran reanudar las conversaciones con el Gobierno estadounidense; asimismo, estableció contactos directos con el Departamento de Estado en Washington.

Prats, por la vía de presentarse regularmente ante Davis como un obstáculo para las ofertas militares soviéticas, tal vez haya tenido en cuenta, al manejarse, su respaldo a Allende, su deseo de contener a los generales y oficiales que expresaban su oposición o recelo frente a cualquier alianza con los rusos y cubanos, y su profundo deseo de mantener la paz interna en Chile, o tal vez se haya dejado manipular hasta el punto de actuar como agente de Allende para conseguir armas soviéticas y lograr el control político de las Fuerzas Armadas. El hecho de que Allende careciera de esos poderes había motivado las críticas de Castro, quien durante su visita a Chile en noviembre de 1971 le advirtió a su anfitrión que la revolución en Chile sería extremadamente vulnerable mientras no lograra crear un ejército “revolucionario” como el suyo en Cuba. Habría sido una actitud característica de Allende utilizar a Prats para agenciarse una partida mínima de armas estadounidenses, y así avanzar hacia las metas estratégicas trazadas por su ídolo cubano.

c) Según lo que señala el embajador Davis en su libro sobre Chile, da la impresión que él se fío de la palabra de Prats, actitud que bien pudo haber sido la correcta. Cuando se refiere a Allende, lo hace en un tono que denota benevolencia y comprensión. Pese a lo anterior, convendría tener presente que Henry Kissinger, cuando era Secretario de Estado, no tardó en recompensar a Davis por sus servicios prestados en Santiago nombrándolo Director General del Servicio Diplomático y Consular inmediatamente después del golpe de Estado. Kissinger jamás habría permitido que alguien considerado como un incauto a las órdenes de Allende ocupara un cargo tan influyente en el escalafón del servicio exterior. Cualquiera que conozca toda la carrera de Davis podría considerar, como una guía más fidedigna para comprender las remembranzas del embajador, el ánimo imperante en la opinión pública estadounidense entre 1975 y 1980.

d) Los autores del Informe sobre las actividades de la CIA en Chile, que la Comisión Senatorial presidida por el senador Church emitió el 12 de noviembre de 1975, disponían de datos factuales que se incluyen en la anterior cronología. El que pese a contar con esa información ellos optaran por ahondar en temas que mueven a confusión, relativos a Allende en particular, al gobierno de la UP y a las actividades estadounidenses, debió haber despertado hace mucho tiempo dudas en los científicos políticos, historiadores y periodistas. El que esto no haya ocurrido, salvo por algunos reparos mínimos y en gran parte acallados, explica mis propios esfuerzos por romper este hermético silencio.

e) Una interesante línea de indagación que podrían profundizar los estudiosos del período de la UP se refiere a si acaso meses antes del derrocamiento de Allende el Partido Comunista adoptó otras medidas para mejorar su posición estratégica a largo plazo, aparte de las actividades políticas encubiertas destinadas a incitar a otros dirigentes a respaldar un golpe. La historia del comunismo en otras regiones del mundo nos enseña que el partido también procuraría eliminar a sus competidores en el ala izquierda —el MIR, el MAPU y los sectores de extrema izquierda del Partido Socialista— en medio del clima de agitación y represión que suele originarse tras un golpe militar. De hecho, la Junta de Gobierno primero dirigió su ira contenida hacia esos objetivos. Con todo, el hecho de que el líder comunista Luis Corvalán permaneciera en Chile y fuera recluido en un campo de internación no puede aceptarse como prueba para refutar la tesis de que el PC pretendía instigar un golpe de Estado, ya que él, al igual que sus patrocinadores, obedecía la regla básica según la cual en tales circunstancias el líder debe mantenerse junto a sus tropas. Por lo demás, Corvalán sabía que el Kremlin nunca abandonaba a sus agentes clave y recurría a la diplomacia para pactar alguna fórmula de canje que permitiera liberarlos.

APÉNDICE N° 2

SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA CIA EN CHILE ENTRE 1969 Y 1976

El error cometido por la CIA se originó en la matriz utilizada por los encuestadores chilenos que había contratado. Ellos habían basado sus cálculos en el censo de 1960, ignorando de ese modo los enormes cambios sufridos por el registro electoral como consecuencia de la promulgación de leyes que permitían votar a ciudadanos de 18 años, y que instaban a una gran cantidad de votantes femeninos y de zonas rurales a ejercer sus derechos.

Otro motivo que contribuyó a este resultado fue la estrecha relación que sostuvo el jefe de estación de la CIA, Henry Hecksher, con Marcos Chamudes, en quien tenía una profunda confianza. Chamudes era un ex jerarca del Partido Comunista chileno quien, como suele ocurrir, había evolucionado hasta convertirse en un acérrimo enemigo del comunismo. Durante el período en que Dungan ocupó el cargo de embajador, la CIA fue

autorizada para financiar una publicación quincenal, el *PEC* (*Política, Economía, Cultura*), editada por Chamudes. Sin embargo, hacia 1968, amén de incluir en sus páginas artículos antisoviéticos, Chamudes había adoptado un tono tan ruidosamente contrario a las políticas de Frei que provocó una sensación de aguda incomodidad. ¿Cómo era posible que Estados Unidos —cuando aún se encontraba en trámite la asignación de cientos de millones de dólares destinados a Chile por los programas de la Administración Kennedy-Johnson— se identificara de manera tan evidente —en los círculos políticos santiaguinos había que ser ciego para no advertir la huella de la CIA en el *PEC*— con una publicación cada vez más empeñada en socavar la imagen de un líder y de su partido, ambos dedicados a promover la democracia, la libertad y la justicia social? De modo que le ordené a Hecksher que suspendiera el financiamiento y logré que la decisión prosperara en Washington pese a las indignadas objeciones de Hecksher. Antes de expirar definitivamente, el *PEC* logró subsistir por algunos meses gracias a contribuciones del sector privado chileno.

Aun así, Chamudes no sólo mantuvo su amistad con Hecksher, sino que además lo asesoró en materias tales como el diseño de la campaña de propaganda anti-UP, a base de afiches, auspiciada por la CIA en 1970 con el objeto de derrotar a Allende. En una estrategia muy similar a la que pudo apreciarse en Italia en 1948 o a la que la Agencia había utilizado en Chile en 1964, los trillados carteles sobre el “Terror Rojo” mostraban tanques del Ejército Rojo entrando a Santiago. Cuando observé sorprendido estas imágenes tan burdas que motivaron mi desaprobación, Hecksher replicó que sus asesores en este país sabían mejor que los extranjeros lo que interpelaba a los chilenos.

Pese a nuestras abiertas discrepancias, Hecksher sabía muy bien que yo sentía un gran respeto por su capacidad profesional, la que le permitía entregar valiosas percepciones de las actividades, políticas y estrategias de los comunistas, sus aliados y patrocinadores. Hasta mediados de 1970 la mayoría del tiempo y los esfuerzos de la CIA se destinaron a asuntos relacionados con la URSS, en particular el intento por “cambiar de bando” a un miembro representante del bloque oriental.

También se puede atribuir a Hecksher el mérito de advertir a la CIA —sin mi conocimiento— que la arriesgada maniobra de Nixon para frustrar el ascenso de Allende al poder no era oportuna y probablemente iba a fracasar. Con todo, este llamado de alerta no disuadió al entonces director de la CIA, Richard Helms, quien sabía que la Agencia había sido creada por el Congreso con el fin de otorgar a un presidente electo un arma adicional en materia de política exterior; él aceptó sin vacilar “el bastón de mariscal”, según sus propias palabras.

Hecksher también había sostenido durante la primera mitad de 1970 que mi política electoral de no intervención sería interpretada en amplios sectores de la opinión pública chilena como muestra de “indiferencia” frente al destino de su democracia, y como una falta de preocupación ante una victoria de Allende. Mientras sus propias encuestas y las opiniones de la sección política de nuestra embajada reflejaran una alta probabilidad de que Alessandri ganaría la elección, su tesis irrefutable, y que a su vez reflejaba con gran exactitud la postura del Secretario Rogers y de la Oficina para Latinoamérica, no logró alterar mi opinión. Yo seguí limitando la función de la embajada y la mía propia a informar sobre aspectos relativos a las campañas, incluido el daño que un triunfo de Allende podría significar para Estados Unidos y para la democracia.

Recién a mediados de 1970, cuando observé a un Alessandri físicamente impedido en la televisión, cuando comprobé que su equipo de campaña sostenía posiciones retrógradas y su mensaje carecía de atractivo, cuando confirmé que la campaña del candidato de la DC estaba tomando un rumbo desastroso, cuando me enteré de que la UP proyectaba adueñarse de todas las palancas del poder tanto económico como financiero, adopté un tono de mayor inquietud e inicié una búsqueda de alternativas. La frugalidad, la rectitud y la repetición de experiencias pasadas no bastaban para que Alessandri alcanzara la presidencia.

No obstante, para gran desaliento de Hecksher y los empresarios norteamericanos, nunca se levantaron las medidas que vedaban la entrega de recursos estadounidenses a un candidato. Yo envié un cable a Washington diciendo que la candidatura de Alessandri era financiada por “peces gordos” chilenos y que disponía de recursos más que suficientes, saliendo así al paso de una insistente campaña fomentada también allá para descalificar mi postura. Agregué que un compromiso estadounidense con la candidatura de Alessandri supondría realizar un esfuerzo continuo para hacer perdurar su gobierno una vez que asumiera el poder, y para socorrer a las empresas norteamericanas que en 1964 participaron en operaciones conjuntas de financiamiento encubierto. Puesto que el Congreso estadounidense nunca habría aceptado sin más ni más asumir la función sustentadora que requeriría un gobierno de Alessandri, y puesto que de ningún modo podía dar su apoyo a las políticas que éste tenía pensado aplicar, las presiones en favor de otorgar recursos no tenían ninguna posibilidad de éxito. Incluso el presidente Eisenhower, miembro del Partido Republicano, le había impuesto como condición a Alessandri aplicar un programa de reforma agraria a cambio de la entrega de fondos de ayuda para los damnificados del terremoto ocurrido a principios de los años sesenta, medida que no

dejó de mortificar a Alessandri, según escuché en tres conversaciones a lo largo de varios años.

Irónicamente, después del triunfo de Allende por mayoría relativa, tanto Henry Kissinger como el entonces director de la CIA, William Colby, ofrecieron a todo el mundo la excusa de que si se hubieran canalizado fondos estadounidenses a la campaña de Alessandri, éste hubiera ganado. En mi única entrevista con Colby (a mediados de 1974), su propio funcionario encargado de la oficina de Chile y el reemplazante de Hecksher, Ray Warren, le señalaron sin ambages que lo anterior era absolutamente falso. Kissinger se valió de ese pretexto para criticar a Rogers en particular, y al Departamento de Estado en general, y de ese modo encubrir su propia complicidad en la “aventura” emprendida por Nixon.

Cabe hacer hincapié en el papel que desempeñaron Colby y Rogers con relación a “Chile”. Al asumir como nuevo director de la CIA en 1974, Colby escogió la vía más conocida, aunque peligrosa, que siguen aquellos funcionarios que ascienden por primera vez a un máximo cargo ejecutivo, sea el de Presidente de los Estados Unidos o de una empresa; él no tardó en aprovecharse de un acontecimiento de interés pasajero para utilizarlo en beneficio propio y de su entidad. En una sesión de información secreta que sostuvo con el presidente de una comisión de la Cámara de Representantes, reclamó para su agencia el mérito de haber derrocado a Allende. La afirmación o la insinuación de una “desestabilización” instigada por la CIA era muy riesgosa para un hombre que, pese a haber demostrado coraje y aptitudes administrativas durante su carrera, nunca había trabajado en Sudamérica, conocía muy poco o tal vez nada de las complejidades de la realidad chilena, y carecía de la sensatez de su predecesor.

Alguien previno al círculo de allegados a los Kennedy sobre lo que Colby había supuesto era un chisme inofensivo, divulgado a un interlocutor inocuo y ansioso por experimentar la sensación —tan disfrutada en Washington— de ser una “persona bien informada”. Así pues, el congresista Michael Harrington (no el conocido sociólogo) de Massachusetts, joven aliado de la familia reinante en ese estado, invocó las normas del Congreso para exigir un acceso igualitario a los pormenores de la sesión secreta en que participó Colby. Tan pronto como se enteró de su contenido telefoneó a Jerry Levinson, asesor legislativo del senador Church, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, le confió su secreto y le pidió que se lo diera a conocer a Hersch, del *The New York Times*, y a Larry Stern, del *Washington Post*. Levinson no tardó en cumplir de buena gana con el encargo. De este modo nació “Chile”.

Tanto Levinson como Harrington violaron de manera impune las estrictas leyes que rigen la seguridad nacional, guiándose exactamente por las mismas motivaciones de “topos” como Maclean o Burgess, o de Alger Hiss. Ellos invocaron una verdad superior o un mayor grado de moralidad para justificar su inobservancia de las normas aplicables a cualquier otro ciudadano estadounidense. Idéntico argumento utilizó Graham Greene para elogiar la traición de Maclean, y la enorme mayoría de los académicos y periodistas estadounidenses aplaudieron, de hecho, la decisión de Levinson y Harrington de hacer caso omiso de la ley.

En el caso de Levinson, según lo escuché de sus propios labios, ciertas consideraciones partidistas pulverizaron cualquier posible vacilación en ignorar las normas de seguridad aprobadas por el Congreso norteamericano, que pagaba su sueldo de funcionario público en ese entonces y también después. Cuando trabajó en la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), Levinson respaldó las operaciones de la CIA en Chile (1963-1964), al igual que la complicidad de la Agencia en el derrocamiento del gobierno brasileño poco más tarde. Gracias al apoyo tal vez explícito, y con certeza implícito, de los principales senadores demócratas, se transformó en una persona intocable, al extremo de reconocer abiertamente su vivo deseo de destituir a Kissinger.

Colby cooperó con la Comisión del Senado entre 1974 y 1975 para salvar su puesto. Cientos de agentes veteranos fueron despedidos, precio que tuvieron que pagar por las faltas de su director, quien luego de jubilarse se transformó en un destacado militante demócrata. En lo que a mí respecta, sin embargo, cuando en 1972 Chile despertó por primera vez cierto grado de interés comparativamente menor en el Congreso estadounidense —a raíz de la investigación sobre la ITT—, Colby me escribió para recordarme que aún podía invocarse el “privilegio ejecutivo”, un paraguas protector que el Secretario Rogers también me instó a abrir. Su asesor jurídico en el Departamento de Estado fue incluso más lejos al pedirme que negara estar al tanto de las relaciones de la ITT con la CIA, un vínculo claramente establecido en las operaciones efectuadas entre 1963 y 1964.

Todavía ignorante de la verdadera situación entre 1972 y 1973, todavía dispuesto a declarar bajo juramento que Estados Unidos *no* había intentado impedir que Allende se instalara en La Moneda, y todavía convencido —aunque no lo decía públicamente— de haber disuadido a Washington de emprender cualquier operación riesgosa, negué de manera tajante estar informado. De hecho, yo había preparado una declaración de desmentido para que se diera a conocer cuando las revelaciones contenidas en los diarios de la ITT salieran por primera vez a la luz; había sido

aprobada para su publicación por la Oficina del Departamento de Estado para Latinoamérica. Resulta interesante mencionar que fue vetada sin explicación por el Secretario Rogers, con la advertencia de que mi intención declarada de divulgarla de todas maneras conduciría a mi inmediata destitución del cargo que ocupaba en ese entonces (asesor especial del director de la OPIC). Con cinco bocas que alimentar y sin reservas de efectivo, tuve que echar pie atrás y de inmediato comencé a buscar otro empleo en el área privada.

Así y todo, el incidente anterior revela con claridad que en 1972 el Secretario Rogers estaba sin duda al tanto de las operaciones de Nixon en 1970, de la complicidad de la ITT y tal vez de mucho más. Pese a haber ejercido antes como Procurador General, él optó por no compartir conmigo lo que sabía, en el mejor de los casos su complicidad de silencio, y a lo menos sobre los sucesos por cuya negación yo corría el riesgo de ser acusado de perjurio o de cosas peores. A decir verdad, Levinson se apresuró a formular una y otra vez esos cargos en sus conversaciones con Hersh y otros periodistas; sus comentarios llegaron a la primera página de una edición de 1974 del *The New York Times*, en un artículo firmado por Hersh que revelaba detalles sobre las actividades de la CIA en Chile. Las dudas respecto de si otros funcionarios del Departamento de Estado sabían tanto como Rogers me llevaron a iniciar una línea de indagación personal que condujo a un callejón sin salida; todos los miembros de ese organismo que fueron confrontados, incluido el embajador Davis en 1974, aseguraron no conocer ningún dato sobre el particular. El hecho de cerrar filas en una organización jerárquica constituye un fenómeno de sobra conocido.

De modo que aquellos secretos que entre 1972 y 1973 me pareció inadecuado divulgar personalmente —las disputas internas, las preguntas y las respuestas entre Washington y la embajada, al igual que los programas aprobados de actividades de la CIA, todos muy modestos y absolutamente legales, normales y comunes— contrastaron con las verdades sobre las órdenes secretas impartidas por Nixon a la CIA, que representantes de la Comisión del Senado me revelaron por primera vez bajo juramento, a mediados de 1974, en mi hogar.

Colby y Rogers bien podrían haber desempeñado un papel similar tras bambalinas en la campaña de difamación en mi contra que se inició a fines de 1975, después de que desafié a la Comisión del Senado en un intento suicida por sacar a la superficie toda la verdad respecto de Allende, la UP y la función que me cupo. En esa época el senador Church, el embajador Dungan y muchas otras personalidades declararon a un reportero, quien me mostró sus apuntes y me hizo escuchar sus cintas, que yo

había sufrido un colapso nervioso, que estaba sometido a tratamiento psiquiátrico, y otras invenciones similares dignas de McCarthy. El *Washington Post* publicó —sin esforzarse en lo más mínimo por comprobar la absoluta falsedad de lo afirmado— que una de mis hijas había salido con uno de los implicados (Townley) en el asesinato de Orlando Letelier. Escuché una cinta en la que se oía la voz del representante administrativo de un senador miembro de la Comisión investigadora ofreciéndole al periodista, como soborno, el acceso exclusivo a secretos de la Comisión si se desistía de continuar investigando mis protestas.

Una serie de amenazas telefónicas anónimas y los insultos proferidos por desconocidos en el pueblito donde residíamos, pronto acabaron por atormentarnos, lo cual no era de extrañar. La mayoría de nuestros amigos por largo tiempo, casi todos los colegas de varios años en la embajada y en el Departamento de Estado, y la mayor parte de los hombres y mujeres con quienes había entablado una relación que iba más allá del simple compañerismo tras casi veinte años en la profesión del periodismo, suspendieron todo tipo de contacto; los pocos conocidos que no nos abandonaron merecieron nuestro mayor aprecio.

Desprovisto de medios personales y de un patrocinio para seguir librando una batalla perdida, a la postre me vi obligado a ceder ante la necesidad de mantener a una fiel esposa y a cuatro hijos, apartándome en lo sucesivo completamente y por voluntad propia de Washington, de la administración pública, de los políticos y de la mayor parte de la vida social en los Estados Unidos.

APÉNDICE N° 3

SOBRE EL GOBIERNO DE EDUARDO FREI M., EL CARDENAL RAÚL SILVA H. Y LA ISLA DE PASCUA

En Santiago, organizaciones eclesíásticas nacionales y extranjeras coordinaron sus esfuerzos de recaudación de fondos en Europa con la CIA y la Casa Blanca; los montos reunidos por medio de esta operación conjunta, provenientes de organizaciones demócratacristianas como la Adenauer Stiftung de Alemania y de monarcas como el Rey de Bélgica, forman parte de las “decenas de millones” a que yo aludí públicamente como la cantidad recolectada por la administración Kennedy para financiar la operación realizada en Chile entre 1963 y 1964. El total podría considerarse como una suma alzada porque el Presidente decidió otorgar el completo respaldo del

gobierno estadounidense a la campaña de Frei, porque la Casa Blanca coordinaba todos los gastos y porque los aportes provenientes del Viejo Mundo obedecían en su mayor parte a una decisión adoptada en la Oficina Oval. De modo similar, las contribuciones en efectivo de empresas norteamericanas eran el resultado de esfuerzos gubernamentales, al igual que los recursos entregados por la AFL-CIO, la Iglesia y diversas organizaciones de caridad, cuyos funcionarios trabajaban en conjunto con la CIA y bajo la dirección general de un comité encabezado por Robert F. Kennedy y Ralph Dungan en la Casa Blanca. Dicho sea de paso, la mayor parte de ellos eran católicos.

Esta coincidencia del Estado con la Iglesia, esta confluencia de fondos públicos y dinero de procedencia eclesiástica dio origen a un programa común que me causó gran inquietud. Como persona criada y educada por gente que suscribía las ideas de la Ilustración, y como conocedor de los nefastos resultados de esa fusión de intereses, por ejemplo en Croacia, Eslovaquia y en otras regiones de Europa, tal situación me chocó, porque a mi juicio se oponía a los fundamentos de la historia y al sistema jurídico norteamericanos. Así pues, me convertí en el primer embajador estadounidense que después de llegar al país no realizó una visita de cortesía al cardenal [Raúl Silva]. En cambio, me atuve a la estrategia de entablar relaciones Estado-Estado presentándome ante el nuncio papal, y calculé que esa omisión deliberada transmitiría a la clase política dirigente local, sin ningún alboroto público, la conveniente señal de “separación”.

El cardenal y yo nos reunimos en privado sólo dos veces, una cuando él acudió a protestar airadamente por el hecho de que los paquetes de alimentos de Catholic Relief provenientes de Estados Unidos estaban siendo repartidos a “las personas equivocadas”. Cuando el prelado comprobó que la distribución no era ilegal, le señalé que lo más aconsejable era remitir el problema a la jerarquía católica norteamericana, y no a la Casa Blanca. El segundo encuentro, una invitación a cenar para que me entrevistara con un acaudalado ciudadano chileno de tendencia conservadora, resultó ser tan insatisfactorio para mí como para el invitado del cardenal.

La embajada y también yo restringimos nuestras visitas a miembros del gobierno demócratacristiano. Con Frei me reuní a solas en contadas oportunidades, tal vez una o dos veces al año como promedio, y frecuentemente por invitación suya. Opté, en cambio, por enviarle libros sobre temas de importancia, todos los cuales fueron leídos y comentados, y sirvieron para cimentar una sana relación. De igual modo, aparte de las negociaciones en torno al cobre, los contactos con los ministros también se cifraron a asuntos apolíticos y bilaterales como parte de un esfuerzo por convencer a

los chilenos de que debían responsabilizarse de la política de su país. Finalmente, por motivo alguno se abordó jamás a congresistas o a senadores con fines de *lobby*.

Frei me dio la impresión de ser una persona excepcionalmente respetable e inteligente, en quien la mayoría de sus conciudadanos veían reflejados sus mejores sentimientos; él gozaba como nadie del aprecio y del respeto de su pueblo. Nuestra primera conversación tuvo lugar en 1967, durante un viaje en avión con destino a La Serena para inaugurar el observatorio chileno-estadounidense situado en la cima del cerro Tololo. Sorprendí al Presidente cuando le señalé que a muchos les costaba distinguir entre el comunitarismo de su partido y el socialismo, ya que al parecer su gobierno estaba aplicando políticas que suponían una intromisión cada vez mayor del Estado en el área privada, ya fuera en la agricultura, la industria o las finanzas.

El sector rural, que necesitaba incentivos para la inversión y el desarrollo de la industria ligera, se enmarcaba en cambio dentro de un sistema análogo al que prevalecía en África, donde los agricultores sometidos al control de precios subvencionaban a los habitantes de las zonas urbanas. Como resultado de lo anterior, un creciente número de personas en condiciones de extrema pobreza pasaban a engrosar las poblaciones callampas alrededor de las ciudades mientras que el gobierno encaminaba sus esfuerzos hacia la aplicación de programas de reforma cuasicolectivos en áreas rurales. Con respecto al sector industrial, en vez de fomentar el desarrollo de la empresa privada, el Ejecutivo ejercía un control progresivo o bien recurría a la fijación de aranceles, a concesión de licencias y a otros medios artificiales para entorpecer el comercio y la inversión. No existía un mercado hipotecario para adquirir viviendas —en ese entonces muy escasas—, y el PDC se oponía a la creación de un mercado de valores.

Poco después, en un discurso público, el Presidente atacó al socialismo y previno contra el riesgo de caer en sus redes. Esta única incursión en una crítica al gobierno de Frei, planteada a un chileno, salió a relucir de manera inesperada y tardía en un cable enviado en 1970 por un par de emisarios de la ITT que visitaron Chile. Ellos aseguraron a sus superiores en Nueva York que esas palabras, pronunciadas hacía tres años, correspondían a una conversación reciente, y el cable siguió su curso hasta ser usado más adelante como prueba en investigaciones senatoriales y publicado como un documento histórico. Resulta imposible adivinar si ellos interpretaron o no en forma errónea la información que probablemente les hizo llegar una fuente de la CIA.

El PDC, por su parte, no vaciló en plantear los problemas más delicados de un modo franco y directo a una embajada en la que veían un interlocutor con el cual tanto Frei como sus principales ministros se mantenían en buenos términos, estuviera o no Nixon en el poder. Al respecto cabe citar un episodio memorable: en una indagación de carácter muy reservado se había descubierto que la gran mayoría de los habitantes de la Isla de Pascua prefería que en ella permaneciera el pequeño destacamento de soldados de la Fuerza Aérea estadounidense y no los 2.000 chilenos destinados a esta diminuta posesión distante unos 3.800 kilómetros del territorio continental. Esta revelación no fue una novedad para nosotros, ya que el alcalde nativo de Rapa Nui había intentado con anterioridad presentar una solicitud para que la isla se transformara en un territorio bajo administración fiduciaria de los Estados Unidos. Yo lo había disuadido en un tono firme, pero cortés, de que tratara de imponerme su propuesta, y confíe en que el asunto se desvanecería gradualmente.

Sin embargo, cuando Allende fue elegido el problema de la isla volvió a irrumpir creando una situación incómoda. Descubrimos que Dungan había conseguido por medio de artimañas que se firmara con Chile el acuerdo necesario de Condición Jurídica de las Fuerzas Militares, el cual en otros lugares del mundo protegía a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses estacionados en el extranjero de cualquier acción entablada por la justicia local. La tardía revelación de este secreto logró convencer a la Fuerza Aérea norteamericana. Ésta acabó por admitir el argumento que yo había estado sosteniendo hacía tres años, de que los avances tecnológicos habían eliminado la justificación aducida por el Pentágono para emplear el largo campo de aterrizaje que habíamos construido en la isla y que compartíamos con la Fuerza Aérea chilena: la supervisión de pruebas nucleares en el Pacífico. Tres monitores instalados en tierra firme podrían realizar la misma tarea a un costo más bajo, en contraste con una medida políticamente delicada y legalmente vulnerable como era destacar pilotos que requerían costosos vuelos de aprovisionamiento, y quienes usaban las mercaderías importadas para mantener, alimentar y en ocasiones seducir a varios de los 1.200 habitantes de la isla.

Aun así, cuando volé a Rapa Nui para dar a conocer la decisión de retirar a los restantes 50 pilotos de los 120 originales que había encontrado en 1967, mi anuncio fue censurado por el mismo alcalde y por el entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Valdés, entre otros. Valdés alegó que se trataba de una “medida tendenciosa” —declaración que provenía de un hombre que procuraba congraciarse con Allende, quien en esa época había ganado las elecciones presidenciales sobre la base de una plataforma antiimperialista. Como una forma de desquitarme por sus numerosos e

indebidos esfuerzos destinados a empañar y explotar una relación con los Estados Unidos que había beneficiado enormemente a Chile, no asistí, pese a la indignada protesta del Departamento de Estado, a la despedida que le ofreció el cuerpo diplomático. Yo estaba seguro que la mayoría de los norteamericanos habrían aprobado esta conducta sin reservas si hubieran estado informados del historial de Valdés durante los períodos presidenciales consecutivos de tres mandatarios estadounidenses.

Otra medida adoptada por el embajador Dungan que afectó nuestra relación con la Fuerza Aérea chilena tuvo que ver con el hecho de que por medio de un computador en el Pentágono se descubrió que un piloto de raza negra había sido destinado a Chile. Los funcionarios civiles del Departamento de Defensa me enviaron un cable confidencial para excusarse por el “error” explicando que contravenía un acuerdo que el representante de las administraciones Kennedy y Johnson había concertado de manera informal. Yo respondí que el piloto negro debía seguir destacado en Chile y que nuestro agregado aéreo notificaría a sus homólogos chilenos de que en lo sucesivo no se respetaría ningún acuerdo de ese tipo. Y así ocurrió.

Esta revelación sobre los Kennedy me dolió particularmente después de la experiencia que había vivido en Etiopía. En 1963 el Departamento de Estado, al igual que en ocasiones anteriores, se había abstenido de enviar a Etiopía ciudadanos estadounidenses de raza negra argumentando que el pasado mayormente semítico de la etnia gobernante de los Amharas de Haile Selassie había transformado a Etiopía en un país racista. Yo me rebelé contratando como mi asistente no sólo a un funcionario negro de la Oficina de Presupuesto, sino que además a otros tres les asigné funciones de gestión en la embajada, donde ocuparon importantes cargos no administrativos.

(La UP, lo mismo que el FRAP, tenían fuentes en Europa Oriental y Occidental. Un ejemplo de la manera en que funcionaba el sistema es la visita a Berlín Oriental que efectuaron los codirigentes del Partido Radical, senadores Bossay y Baltra. Poco después de recibir fondos allá se integraron a la coalición que nominó a Allende como candidato para las elecciones de 1970. Los socialistas también recibían ayuda de Alemania Oriental y de otras capitales de países satélites soviéticos, aunque no es posible calcular el monto, ya que nadie en Occidente estaba enterado de la totalidad del flujo hacia los diversos partidos. Archivos soviéticos divulgados no hace mucho dan a conocer las sorprendentes cantidades que Moscú donaba a partidos comunistas de Europa Occidental y de Estados Unidos. El Partido Comunista chileno, como era el más importante y el mejor dirigido de Latinoamérica, aparte del cubano, es probable que haya recibido una cuota considerable antes y después de la elección de Allende. Aun así, no estoy en condiciones de ofrecer ninguna estimación.)

APÉNDICE N° 4

SOBRE LAS NEGOCIACIONES SOSTENIDAS EN 1971
CON EL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE

Mi esposa confrontó a un avergonzado embajador Jova, quien se hospedaba en nuestra casa, y di cuenta de sus actos por carta a un Departamento de Estado impúdico. La intrusión de Jova ocurrió en la misma época en que se ponían en marcha importantes negociaciones con la Unidad Popular y se iniciaban las consultas para decidir sobre la primera serie de nacionalizaciones. Pero esto no logró impedir el avance de este proceso. Gracias a mi colaboración o asesoría, unas veinte empresas estadounidenses recibieron una indemnización satisfactoria por sus bienes.

Las tres grandes firmas que contaban con un seguro del gobierno estadounidense —la Anaconda, la Kennecott y la ITT— sólo podían recibir ayuda, estimé, si las negociaciones bilaterales permitían establecer un creciente nivel de confianza mutua. De modo que el plan consistía en empezar con las empresas menos importantes, exigiendo no más de US\$ 15 millones en indemnizaciones, para luego negociar el monto correspondiente a las próximas dos dentro de un margen de 20 a 50 millones, y a continuación ocuparse de las tres últimas.

En marzo de 1971 la UP no sólo había corrido la voz por sus medios de difusión de que no deseaba verme partir, sino que, además, parecía que faltaba muy poco para salvar el último escollo que impedía que el *modus vivendi* entre nuestros países se convirtiera en realidad. Las negociaciones secretas que sostuve con el socialista Carlos Matus se basaron en el éxito obtenido con la fórmula ya aceptada para la firma Bethlehem Steel. Habíamos logrado acordar una vía para resolver el problema de la compleja inversión de Cerro Copper Company en una nueva mina, la que estaba a punto de entrar en funcionamiento con recursos también asegurados por la OPIC.

Si el gobierno de Allende no podía soportar que Cerro Copper recibiera un trato justo, entonces estaría enviando una clara señal de que sólo discriminaba en contra de Estados Unidos y, lo que es más importante, de que las leyes chilenas ya no podían resguardar ninguna propiedad privada, incluidas las que pertenecían a las compañías europeas que en ese entonces estaban siendo favorecidas y que esperaban sacar provecho del éxodo de las empresas norteamericanas.

Allende captó la trascendencia de la decisión sobre Cerro Copper, lo mismo que su embajador en Washington, Orlando Letelier, quien logró crear una poderosa plataforma de apoyo en nuestra capital, no obstante

haber perdido credibilidad en el Departamento de Estado porque reiteradas veces no cumplió compromisos contraídos o formuló promesas engañosas. En su calidad de Secretario Adjunto interino o suplente, el embajador Crimmins le había reprochado a Letelier su inaceptable duplicidad, en especial por la manera en que éste había “involucrado” al Departamento en una negociación de créditos con el Eximbank, en la cual se aprovechó de la confianza del Departamento para culpar más tarde a los Estados Unidos, con la consiguiente publicidad. Letelier aseguró en numerosas oportunidades que el gobierno de Allende indemnizaría a la Anaconda y la Kennecott cuando, en realidad, había prosperado la determinación en contrario, es decir, de no pagar suma alguna.

Así pues, cuando Allende me telefoneó para anunciarme que el acuerdo sobre Cerro Copper se firmaría en una ceremonia televisada a la cual deseaba que yo asistiera, el Departamento de Estado y *The New York Times* (no así la embajada) se apresuraron a concluir que el asunto estaba cerrado. En una llamada telefónica que me hizo por una línea abierta e intervenida, Crimmins exclamó: “¡Lo lograste de nuevo, otro milagro!”, aludiendo a las negociaciones sostenidas en 1969 para resolver el problema del cobre que, según me confesó, ni él ni ningún otro funcionario del servicio exterior que él conociera hubiese sido capaz de concebir o de llevar a cabo.

El día programado para la firma, *The New York Times* publicó en su primera edición una crónica muy fiel a los hechos escrita por su corresponsal en Santiago, Juan de Onís. El contenido de este artículo fue ignorado y contradicho tres años más tarde por Seymour Hersh y sus editores, cuando indebidamente se apresuraron a publicar declaraciones no comprobadas —cortesía de Michael Harrington, congresista infractor de la ley— que les hizo llegar Jerry Levinson. (Además, también debería haberse cuestionado el hecho de que *The New York Times* hubiera encargado un reportaje sobre el tema a De Onís, por cuanto estaba casado con una chilena cuyas propiedades estuvieron bajo la atenta mirada de la Unidad Popular durante ese período; esta recusación, al parecer, no es aplicable al *The New York Times*, como tiempo más tarde me lo permitieron comprobar otros incidentes.)

Como yo había prevenido a Crimmins sobre la posibilidad de que Allende no firmara, no nos causó tanta sorpresa su llamada telefónica para cancelar, sólo quince minutos antes de su inicio, la ceremonia a la cual ya me había excusado de asistir, cuando me llamó por primera vez, aduciendo que sería mejor para ambas partes, tal como en 1969, dar la impresión de que las negociaciones se habían efectuado con la empresa. “Tengo un pequeño problema en mi gallinero”, me dijo Allende, añadiendo que el acuerdo se firmaría dentro de poco.

Señalé a Washington que nuestro hincapié durante 1969 y 1970 en el hecho de que Allende había logrado ser candidato del Partido Socialista sólo concediendo derecho de veto al senador Carlos Altamirano, militante de extrema izquierda, se había convertido en una maldición autocumplida. La candidatura de Allende, que contaba con el respaldo del Partido Comunista, ni siquiera había logrado reunir una mayoría en el comité central del Partido Socialista, el propio partido de Allende. El PC calculaba que, como abanderado de la UP, Allende sería capaz de apaciguar a importantes sectores de la burguesía infundiéndoles una sensación de autocumplencia, y que después seguiría su curso el proceso de autodestrucción gradual de la oposición burguesa en Chile. El PDC, los radicales e incluso los conservadores podrían ser fragmentados cuando se aplicaran armas tales como las interpretaciones legales de la Constitución, y cuando entraran en juego la corrupción, las ambiciones o los temores individuales y el chantaje. Yo antes había visto una situación muy similar en Hungría, donde el líder comunista, Matyas Rakosi, aplicó con éxito el mismo programa entre 1946 y 1949.

En este caso, el senador Altamirano, junto con el MIR —movimiento juvenil y ultrarrevolucionario liderado por un sobrino de Allende—, el MAPU y la Izquierda Cristiana se interpusieron como una barrera que dificultaría la aplicación de la estrategia apoyada por Moscú.

El fracaso de los intentos por llegar a un acuerdo con Cerro Copper en ese entonces (la empresa apeló a otros métodos cuestionables para conseguir un acuerdo con Allende el año siguiente al de mi partida de Chile) me impulsó a proponerle a Allende una extraordinaria oferta final a mediados de 1971. De nuevo tuve que entenderme primero con Matus, quien, tal vez más que ningún otro miembro del equipo de Allende, vislumbraba el sombrío futuro que le aguardaba a Chile si prescindía de un *modus vivendi* con la fuente de capital y tecnología más importante del mundo. Aun cuando durante su gestión como ministro, entre 1972 y 1973, actuó como un funcionario estridente dedicado por entero a destruir todo vestigio de poder burgués, Matus apoyó sin reservas la idea que le expuse a grandes rasgos en junio, y que constituyó la base de la propuesta de Brady sobre los bonos formulada en los años ochenta:

- Si el gobierno chileno emitiera bonos a, digamos, 15 años, con cupones semestrales por un monto no inferior al seguro garantizado por el contribuyente estadounidense para las nuevas inversiones de la empresa durante los años posteriores a la administración Kennedy, entonces yo me comprometería a devengar el tipo de interés más bajo posible en los Esta-

dos Unidos (el del Export-Import Bank), y la garantía del tesoro norteamericano para los valores emitidos por el régimen de Allende, que de lo contrario carecerían de todo valor.

Si bien yo puse de manifiesto que actuaba por mi propia cuenta, confiaba en que Washington me daría su respaldo. A decir verdad, yo ya había aclarado este punto en una conversación informal que sostuve durante un almuerzo en dicha ciudad con Salzman, presidente de la OPIC. Y subrayé que las gestiones con relación a Bethlehem Steel y Cerro Copper también se debían a mi iniciativa, y que la primera se opuso terminantemente a la propuesta, pero que al final se había llegado a una solución satisfactoria para ambas compañías, que recibió la aprobación de los Estados Unidos.

Advertí que las tres empresas seguramente se negarían a aceptar sumas demasiado inferiores al valor de mercado de sus bienes, pero predije que “de todos modos recurrirían a la banca”. Porque la absoluta confianza y seguridad que les inspiraban a los Estados Unidos los bonos chilenos convencerían a cualquier banco norteamericano para hacer efectivos de inmediato todos los valores con un pequeño descuento. En consecuencia, las firmas recibirían utilidades imprevistas al contado, en lugar de esperar por muchos años para enterarse de la suerte corrida por sus bienes confiscados y sus demandas de indemnización. Fue así como, en definitiva, respaldaron este procedimiento una vez que ya estaba en marcha, y la OPIC las mantuvo informadas sobre los pormenores.

Como le manifesté a Allende tiempo más tarde, Chile podría tener su socialismo sin penurias. Le aclaré que tendría acceso al capital, a la tecnología y a los mercados sin la amenaza de represalias por parte de las empresas o de un implacable y duro Presidente Nixon.

Mis negociaciones con Matus no llegaron a buen puerto. Por una parte, la izquierda obstaculizó las iniciativas de Allende y de sus colaboradores y, por otra, el mandatario se dejó deslumbrar por la aparente prosperidad de sus primeros seis meses en el poder. Lo mismo le ocurrió a la manada de economistas complacientes del Partido Laborista británico (Lord Balogh, por cierto) y de otras instituciones estadounidenses y occidentales que se reunieron una tarde en mi casa y sólo preveían un futuro auspicioso para Allende. El hecho de que Letelier consiguiera que un cabildeiro [*lobbyist*] del prestigio del embajador Sol Linowitz abogara en favor de la causa de Allende también fue un factor muy importante que contribuyó a que el Presidente se engañara a sí mismo. El ambicioso Linowitz tenía un enorme ascendiente al interior del Partido Demócrata, colectividad a la

que había prestado una amplia colaboración, en particular a su futuro candidato presidencial, Walter Mondale. Cuando viajó a Santiago durante el gobierno de Frei —a quien él también admiraba sin percatarse, al parecer, de la inmensa brecha que existía entre ambos mandatarios chilenos—, me pidió que lo acompañara a dos visitas que le interesaba realizar en particular: a Gabriel Valdés, a donde tuvo que ir solo, y al padre Roger Vekemans, jesuita belga que trabajaba en el Centro Belarmino —fue la única oportunidad que estuve en esa institución—, donde sólo encontramos a otro miembro de la congregación en la puerta, quien nos pidió firmar el registro antes de irnos. Es probable que el hecho de no saber una palabra de español, sumado a su aparente desconocimiento de los denodados esfuerzos que realizaron los demócratas por detener a Allende en 1964, y a su ignorancia en materia de marxismo-leninismo, hayan transformado a Linowitz en fácil presa del atractivo combinado que ejercían Letelier, Valdés y Galo Plaza.

El senador Altamirano se dio cuenta de por qué mi propuesta planteaba una buena solución para los Estados Unidos. Si Allende accedía a avenirse con el “imperialismo y el capitalismo”, la extrema izquierda, los así llamados maoístas, se verían forzados a renunciar a la UP y dejar el camino libre para que sus enemigos ideológicos, los comunistas, hicieran un trato con un ala de los demócratacristianos. Yo estimé que, en tal caso, a Allende le resultaría cada vez más difícil hacer frente a la vez a la tormenta que se avecinaba, causada por la lluvia de oferta monetaria, y a la ausencia de inversiones externas de consideración en un país con una inclinación tan marcada hacia la izquierda.

El gobierno de la UP sería probablemente un gran fracaso, pero representaría una amenaza mucho menos activa para la estabilidad de los países vecinos. En 1971 miles de izquierdistas de toda Latinoamérica habían acudido en masa a Chile por considerar que esta nación era una zona de estacionamiento de tropas donde podían trazar planes y recibir fondos para sus programas revolucionarios. La mayoría de ellos mantenían lazos con Cuba y dirigían su atención hacia los grupos liderados por Altamirano y no hacia un gobierno que habría entablado negociaciones con los odiados “yanquis” y el despreciable PDC. En el mejor de los casos, el proyectado eje La Habana-Santiago enfrentaría una etapa de turbulencia.

Matus se sintió tan alarmado ante el inminente rechazo de la propuesta, que me llamó desde una cabina telefónica ocultando su identidad para advertirme que “todo se habrá acabado entre nosotros y usted si no logra que cambien de opinión”. Fuera del soborno, a lo cual yo no iba a prestarme, no se me ocurría qué otra alternativa podía tener él en mente, ya

que fue incapaz de ofrecer alguna opción. Nunca volvimos a entrevistarnos porque yo no deseaba comprometerlo.

Cuando por fin Allende declaró en una sombría reunión en La Moneda “Gracias, pero no gracias”, manifesté que lo lamentaba y volví a advertir que mi Presidente no tomaría la decisión a la ligera. Añadí que mi misión había concluido, de lo cual notifiqué además al Departamento de Estado, apresurándome a aclarar que mi permanencia en Chile ya no tenía ninguna justificación. El embajador Davis, cuya frustración y molestia, cuando no su ira y resentimiento, habían aumentado cada vez más a lo largo de los diez meses de dilación desde su nombramiento, se dirigió raudamente a Santiago el día después de mi partida, el 12 de octubre de 1971, a cuatro años de mi llegada el Día de la Raza, el mismo día feriado en que regresé a Estados Unidos por primera vez después de 25 años.

La publicación parcial o total de la relación de las negociaciones con el gobierno de Allende no fue autorizada por Hersh, cuya postura se acercaba más a la de Altamirano. Sus superiores en *The New York Times* —sobre todo Abe Rosenthal, quien profesaba un abierto anticomunismo— sólo dieron su consentimiento cuando la divulgación ya no tenía ningún sentido. Y todo por razones que nunca se explicaron ni fueron sometidas al juicio de la opinión pública democrática. En términos de conductas, el episodio del *The New York Times* es del mismo tenor que el del caso Watergate, donde el encubrimiento fue la motivación de lo que el senador demócrata Pat Moynihan consideró un delito menor, pero que dejó al descubierto la metodología y las costumbres de un gobierno. La pregunta reveladora que cabría formular a este respecto es: ¿quién actuó más honorablemente en 1971 en las negociaciones con el gobierno de Allende: la administración Nixon, que secundó mis iniciativas por espacio de casi un año a pesar de su antipatía ideológica, o *The New York Times*, que impidió una revelación oportuna de dichas negociaciones, así como de los novedosos pormenores de los esfuerzos denodados por llegar a algún acuerdo con Allende? El director del *The New York Times*, lo mismo que el mandatario chileno, cedió ante la presión de los sectores de izquierda.

Ésta es, a mi juicio, la verdadera historia moral del caso “Chile”. □